



FACULTAD DE DERECHO

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO A LA
PROFESIÓN DE ABOGADO**

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

***EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ASISTENCIA
RELIGIOSA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
ESPAÑOLES***

***HISTORICAL EVOLUTION OF RELIGIOUS ASSISTANCE IN
SPANISH PRISONS***

Autor: Paul Beniamin Stoica

Tutora: Dra. Dña. Isabel Cano Ruiz

enero 2020

RESUMEN:

En el presente trabajo se estudia la asistencia religiosa penitenciaria empezando por una primera aproximación en cuanto a su contenido y principios informadores; así como su fundamentación constitucional, y los distintos modelos existentes de asistencia espiritual.

Acto seguido se aborda el fundamento, la titularidad y los destinatarios de la misma. Una vez establecidas estas nociones generales se recuerda el desarrollo y contenido del derecho a la asistencia religiosa en el ámbito penitenciario a lo largo de la historia comprendida entre los siglos XVI – XX.

Finalmente se plantea el marco jurídico de la asistencia religiosa en el ámbito penitenciario individualizando la normativa internacional, la legislación estatal unilateral y los acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas.

PALABRAS CLAVE:

Asistencia religiosa, centros penitenciarios, libertad religiosa.

ABSTRACT:

In the present work, religious penitentiary assistance is studied starting with a first approximation in terms of its content and informative principles; as well as its constitutional foundation, and the various existing models of spiritual assistance.

Next, the foundation, the ownership and the addressees of the same are addressed. Once these general notions are established, the development and content of the right to religious assistance in the penitentiary sphere throughout the history between the sixteenth and twentieth centuries is remembered.

Finally, the legal framework of religious assistance in the penitentiary area is presented, individualizing international norms, unilateral state legislation and cooperation agreements with religious denominations.

KEY WORDS:

Religious assistance, penitentiary centers, religious freedom.

INTRODUCCIÓN	1
I. APROXIMACIÓN A LA ASISTENCIA RELIGIOSA	1
1. La asistencia religiosa: concepto y principios informadores	1
1.1. Concepto	2
1.2. Principios informadores	3
2. Fundamentación constitucional del derecho a la libertad religiosa y a la asistencia religiosa	6
3. Modelos de asistencia religiosa	8
II. NOCIONES GENERALES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN CENTROS PENITENCIARIOS	12
1. Nociones generales	12
1.1. Fundamento	12
1.2. Titularidad.....	14
1.3. Destinatarios	15
1.3.1. Iglesia Católica.....	15
1.3.2. Confesiones minoritarias.....	16
1.3.2.1. Con acuerdo de cooperación.....	16
1.3.2.2. Sin acuerdo de cooperación	17
2. Evolución histórica de la asistencia religiosa penitenciaria en España	18
2.1. La asistencia religiosa durante los siglos XVI – XVIII	19
2.2. La asistencia religiosa durante el siglo XIX	21
2.3. La asistencia religiosa durante el siglo XX.....	24
III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA PENITENCIARIA	27
1. Marco jurídico de la asistencia religiosa en el ámbito penitenciario	27
1.1. Normativa internacional	27
1.1.1. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.....	28
1.1.2 .Las reglas penitenciarias europeas.....	30
1.2. Legislación estatal unilateral.....	35

1.2.1. La Ley General Penitenciaria y breve reseña a los reglamentos penitenciarios de 1981 y 1996.....	35
1.2.2. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa.....	39
1.3. Acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas	40
1.3.1. Acuerdos de cooperación con la Iglesia católica de aplicación estatal.....	41
1.3.2. Acuerdos de cooperación con las confesiones minoritarias y el Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, sobre asistencia religiosa penitenciaria.....	44
CONCLUSIONES	50
BIBLIOGRAFÍA	51
ÍNDICE LEGISLATIVO	57
ÍNDICE JURISPRUDENCIAL	57

INTRODUCCIÓN

Sería un desacierto no tener en cuenta que nuestra sociedad se compone por sujetos que pueden encontrarse en situaciones muy dispares. Y puede ser, cómo de hecho sucede con la asistencia religiosa, que el Estado tenga el deber de garantizar el correcto ejercicio de determinados derechos que corresponden a los ciudadanos por el mero hecho de ser personas.

Mediante la presente investigación, vamos a analizar la asistencia religiosa en centros penitenciarios en España desde la perspectiva evolutiva con el fin de entender la importancia que ha supuesto en el sistema penitenciario el ejercicio de este derecho; pero también, la relevancia y forma de desarrollo de la misma hoy en día para así determinar si se han introducido cambios positivos en la legislación y en la práctica carcelaria.

De igual manera, aspiramos identificar el momento en el que la asistencia religiosa en centros penitenciarios fue considerada como una actividad específica en sí misma destinada a las personas ingresadas en dichos centros. Asimismo, por la relevancia que han ocupado los capellanes a lo largo de la historia de los centros penitenciarios, deseamos detenernos sobre la figura del capellán con el objetivo de observar la trayectoria que recorre este cuerpo funcional público.

Consideramos que la mejor forma de lograr los objetivos marcados es iniciar el ensayo despejando ideas básicas sobre la asistencia religiosa penitenciaria, como por ejemplo su fundamento, su titularidad o, a quién se destina la misma. Una vez dilucidadas estas cuestiones, comenzaremos a reflexionar sobre la evolución histórica que ha experimentado, y su desarrollo legislativo a nivel internacional y nacional.

I. APROXIMACIÓN A LA ASISTENCIA RELIGIOSA

1. La asistencia religiosa: concepto y principios informadores

Lo primero que se debe hacer al estudiar la asistencia religiosa en centros penitenciarios es una primera aproximación en cuanto a su concepto y sus principios informadores. No obstante, en este primer apartado de acercamiento nos referiremos simultáneamente tanto al derecho fundamental a la libertad religiosa como a la asistencia religiosa, pues ésta última encuentra su base o es la consecuencia de la primera. Por lo tanto, deberemos entender primero el fundamento del derecho a la

libertad religiosa para poder comprender por qué la asistencia religiosa es una de las principales manifestaciones de tan importante derecho.

1.1. Concepto

La asistencia religiosa es una de las muchas actividades que pueden llevar a cabo las confesiones religiosas en favor de sus creyentes. Por norma general todos los fieles pueden acceder a esta asistencia, aunque existen supuestos en los que resulta complicado el ejercicio de dicha actividad, como puede ser en aquellos casos en los que las personas se encuentran internadas en centros penitenciarios, hospitales, centros asistenciales u otros centros similares públicos que dependen del Estado; aunque nos gustaría matizar que en este estudio se analizará detenidamente tan sólo el ejercicio de la asistencia religiosa en centros penitenciarios españoles.

Concretamente, la asistencia religiosa consiste en la posibilidad de recibir los servicios espirituales de la propia confesión, a petición propia del creyente, en situaciones de especial sujeción que implica necesariamente una cierta cooperación externa por parte del Estado¹. Dichas situaciones de especial sujeción se identifican principalmente con el ámbito de los centros penitenciarios, las Fuerzas Armadas y con el sistema hospitalario público, aunque como se ha mencionado anteriormente, también podría incluirse otros centros asistenciales públicos, como por ejemplo, las residencias para personas de la tercera edad y los orfanatos.

Llamazares define la asistencia religiosa como "*la acción del Estado destinada tanto a eliminar los obstáculos esenciales que afectan a algunos de sus ciudadanos (bien por una situación de hecho, como la enfermedad, bien consecuencia de estar cumpliendo alguna especial obligación para con el Estado) para el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, así como para fomentar y promocionar la misma de modo que sea real y efectiva, sin discriminación con relación al resto de los ciudadanos*"².

Esta colaboración, a la que hace referencia Llamazares, entre el Estado y las confesiones religiosas, se puede llevar a cabo de distintas maneras. Por ejemplo, facilitando la entrada de los ministros de culto a los lugares, proporcionando locales o

¹ Sobre las reflexiones doctrinales acerca del concepto de "asistencia religiosa" y de "especial sujeción" cfr. GONZÁLEZ DEL VALLE J. M., *Derecho Eclesiástico Español*, 6ª ed., Thomson Civitas, Pamplona, 2005, p., 193-196.

² LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D.; *Derecho Eclesiástico del Estado: derecho a la libertad de conciencia*, Civitas, Madrid, 2011, p., 265 – 267.

lugares para las prácticas religiosas, etc.; pero sobre este tema nos detendremos más adelante.

Es relevante tener en cuenta que dentro del marco de la asistencia religiosa intervienen varios sujetos: el Estado, la confesión religiosa y sus miembros. Sobre el Estado pesa el mandato de colaboración para que esta actividad se pueda efectuar en situaciones óptimas. Por parte de la confesión, la actuación del ministro de culto, que es el encargado de prestar la asistencia religiosa. Y en cuanto a los miembros de las confesiones religiosas, estos son los que deben de solicitar la satisfacción de dicha prestación tanto a la propia confesión como al Estado.

1.2. Principios informadores

a) Principio de laicidad del Estado

La aconfesionalidad, neutralidad o la laicidad del Estado se refleja en el artículo 16.3 de la Constitución Española de 1978 (en adelante CE) mediante la afirmación: "*ninguna confesión tendrá carácter estatal*". La fórmula empleada refleja el mandato imperativo de mantener una actitud positiva por parte del Estado y la voluntad de reconocimiento de las confesiones religiosas existentes o, de aquellas que surjan con el paso del tiempo (y se ajusten a la legislación vigente)³ sin que ello suponga la identificación del Estado con alguna de ellas, pues se pretende mantener el correcto ejercicio tanto individual, como colectivo, del derecho fundamental a la libertad religiosa. Mediante el mencionado inciso la Constitución apunta a la separación civil y política, por un lado; y religiosa y confesional, de otro. Además introduce una nueva idea, la de la neutralidad, mediante la cual se pretende abandonar tanto el rechazo como la promoción del hecho religioso considerado en sí mismo. En lo que a la neutralidad se refiere, en este apartado sólo haremos una pequeña mención, pues se estudiará seguidamente como un principio informador independiente.

Puesto que se pretende evitar incurrir en la confusión de funciones estatales y religiosas o menoscabar de algún modo la igualdad y el pluralismo de las ideas y creencias, la exigencia de neutralidad del Estado se emplea como parámetro de control de la actuación de los poderes públicos. Dicho de otra forma, el concepto de neutralidad manifiesta la laicidad del Estado, pero se ha de tener en cuenta que no se

³ Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa; Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España; Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.

trata de un fin en sí mismo, sino que la neutralidad ha de ser el medio orientado a la garantía, defensa y promoción de la libertad religiosa⁴.

El principio de laicidad implica, por un lado, una dimensión negativa, que fue la amparada en el pasado. Esta dimensión hacía alusión a la separación que debía existir entre los ámbitos propios de actuación del Estado y el de las confesiones. Pero también tiene otra dimensión positiva, incorporada un poco más tarde, que hace referencia a la neutralidad que el Estado debe observar con el objetivo de garantizar un tratamiento de igualdad a todas las personas y comunidades, con independencia de cuál sean sus opciones religiosas. Esta actuación neutral que pretende conseguir el Estado, con el objetivo de preservar el principio de laicidad, sólo se puede obtener si el Gobierno, en el ejercicio de sus competencias, actúa guiándose y respetando los valores consagrados en la propia Constitución, no guiándose por valores puramente religiosos.

b) Principio de neutralidad del Estado

Tal y como se ha mencionado anteriormente, existió un cambio en la comprensión contemporánea de la libertad religiosa ofreciéndose una redefinición del alcance del principio de laicidad. Se ha de tener en cuenta que fue más que natural dicha modificación, pues el carácter democrático y pluralista del Estado obliga al reconocimiento igualitario de las distintas confesiones religiosas sin llegar el Estado a profesar ninguna de ellas. De este modo, se pasa a entender que el constituyente ha de asegurar un marco de convivencia en el que se puedan exteriorizar libremente las creencias y convicciones, ya sean religiosas o ideológicas, haciendo así posible que todos puedan ejercer ordenadamente sus derechos⁵.

Es acertado afirmar que el principio de neutralidad del Estado implica un conjunto de garantías que éste debe observar para salvaguardar el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa en una sociedad formada por un pluralismo de convicciones y creencias⁶.

Por eso el constituyente establece un mandato en el artículo 16.3 de la Constitución Española (en adelante CE) que reza así: *"Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la*

⁴ ROJO ÁLVAREZ-MANZANEDA, L., "La asistencia religiosa", en PORRAS RAMÍREZ, J. M., (coord.), *Derecho de libertad religiosa*, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2016, p., 221 – 228.

⁵ Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia núm. 41/2001, de 12 de febrero, FJ 7º.

⁶ Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4º.

sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones." Este encargo pretende evitar dar lugar a una actitud estatal de indiferencia, y al mismo tiempo fundamenta la actuación de los poderes públicos ya que el derecho a la libertad religiosa ahora es un interés jurídico protegido de relevancia constitucional.

El mencionado precepto, en relación con el 9.2 de mismo cuerpo legal⁷ supusieron el desarrollo de un amplio abanico de instrumentos de reconocimiento, tutela (incluso de carácter penal)⁸, promoción y garantía del derecho a la libertad religiosa. Esto supone que los poderes públicos deben crear las condiciones más óptimas para que se pueda llevar a cabo libremente y sin ningún tipo de interferencias el ejercicio de las numerosas opciones religiosas.

En este punto conviene hacer un pequeño inciso referente a la mención constitucional de la Iglesia Católica, pues parece incompatible el principio de neutralidad del Estado con la aparente supremacía del culto católico en detrimento de las restantes comunidades religiosas. Es importante tener en cuenta que el constituyente no pretendía establecer vínculos privilegiados con la Iglesia Católica u ofrecerle trato de favor alguno, sino que únicamente se realiza tal mención como mera constatación de su amplia implantación social y por su notorio arraigo histórico, social y cultural. Por este motivo el régimen jurídico que se prevé en el marco constitucional, se extiende a los demás sujetos colectivos de creencias religiosas reconocidas en el territorio nacional.

c) El principio de cooperación con las confesiones religiosas

De conformidad con lo mencionado anteriormente, el tercer apartado del artículo 16 CE expresa un mandato de cooperación dirigido a los poderes públicos. Puede parecer, a primera vista, que esta exigencia choca directamente con el principio de neutralidad estudiado anteriormente. No obstante, hay que tener presente que ambos principios no son opuestos, sino que se han de interrelacionar de forma que se puedan complementar el uno al otro. Para lograr esta complementariedad entre ambos principios se ha de realizar una interpretación sistemática e integrada en torno a la

⁷ Artículo 9.2 de la Constitución Española: *"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social"*.

⁸ Artículos 522 – 526 del Código Penal.

caracterización del tratamiento que alcanza el derecho fundamental a la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico español.

El principio de cooperación, en relación con el artículo 9.2 CE, supone el abandono de las ideas laicistas más radicales favorecedoras de una valoración negativa del fenómeno religioso que entendían, de una forma demasiado estricta, la separación que ha de existir entre los ámbitos de actuación del Estado y de las confesiones religiosas; por lo tanto se ha de buscar un nuevo marco interpretativo propio del Estado social de Derecho, según el cual los poderes públicos han de asegurar a los individuos y a las comunidades religiosas que el ejercicio de este derecho se desarrolla en condiciones materiales de igualdad⁹, pues todos poseen la titularidad del derecho fundamental a la libertad religiosa.

No se ha de perder de vista que el principio de cooperación va más allá de la simple obligación por parte del Estado a mantener una relación directa de colaboración con los grupos sociales institucionalizados que orientan su actuación a la consecución de fines religiosos. Esta actitud se basa en una decisión adoptada por el constituyente que ha preferido hacerlo así, aun a sabiendas que tal postura es más propia del sistema confesional empleado anteriormente, ya que por aquel entonces se realizaba una valoración positiva del fenómeno religioso considerado en sí mismo. Pero es más que evidente que esta apreciación no puede efectuarse en un Estado aconfesional. Por lo tanto se ha de interpretar como una concreción de la función que poseen los poderes públicos como garantes de los derechos reconocidos en la Constitución.

2. Fundamentación constitucional del derecho a la libertad religiosa y a la asistencia religiosa

Cómo bien es sabido, el derecho a la libertad religiosa, como derecho fundamental que es, se consagra en nuestra Constitución en el artículo 16.1 CE¹⁰. El precepto mencionado en su conjunto garantiza el derecho de libertad religiosa a las personas individualmente y a las comunidades formadas por las mismos, y establece un mandato a los poderes públicos para que tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantengan las relaciones de cooperación con aquellas

⁹ Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1º.

¹⁰ Artículo 16.1 de la Constitución Española: “*Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley*”.

confesiones que representan, repetimos, institucionalmente, las creencias religiosas de nuestra sociedad.

La doctrina mayoritaria coincide en sostener el fundamento constitucional para la asistencia religiosa en el artículo 16.3 CE, en relación con el artículo 9.2 CE¹¹; o sea, la ciencia predominante entiende que la asistencia religiosa es una manifestación del derecho a la libertad religiosa y requiere la cooperación por parte de los poderes públicos para que ésta sea efectiva realmente. Se podría afirmar que resulta más que lógicas y legítimas las expectativas de los titulares del derecho a la libertad religiosa a recibir el apoyo religioso necesario en aquellas situaciones especiales o de especial sujeción, pues de lo contrario este derecho fundamental dejaría de materializarse realmente en la sociedad.

No obstante no podemos olvidar las normas de desarrollo del mencionado precepto constitucional, pues la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (en adelante LOLR) reconocen su artículo 2.1.b) admite el derecho de toda persona a "*practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión*", y en el tercer apartado del mismo artículo se subraya el principio de cooperación afirmando que "*para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros pagos o dependencia*".

En efecto, en España el ordenamiento jurídico regula la prestación de asistencia religiosa en las situaciones de especial sujeción. No obstante, hay que recordar que la asistencia religiosa ha existido también en épocas en las que la libertad religiosa sufría muchas carencias o era prácticamente inexistente o ausente; aunque si bien es cierto, se limitaba a la confesión oficial. Por lo tanto, exceptuando el periodo de la Segunda República¹², siempre ha existido asistencia religiosa católica en los centros penitenciarios, en las Fuerzas Armadas, en los hospitales públicos y en centros de

¹¹ Cfr. GOTI, J., *Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2ª ed. revisada, ed. del Autor, Zaráuz, 1994, p., 733-734 y 738-739; MOTILLA, A., IBÁN, I. C., PRIETO SANCHÍS, L., *Manual de Derecho eclesiástico*, Trotta, Madrid, 2004, p., 261-264; LLAMAZRES, D., *Derecho de la libertad de conciencia II. Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad*, 2ª Thomson-Civitas, Madrid 2003, p., 587.

¹² La II República disolvió los Cuerpos eclesiásticos militares y los de Capellanes de Prisiones y Beneficencia.

beneficencia¹³. Lo que sí que ha cambiado con el pleno reconocimiento de la libertad religiosa y la llegada de la democracia ha sido la ampliación de la extensión de la asistencia religiosa, pues ya no se presta sólo a la confesión católica, sino que ahora la asistencia religiosa comprende a las demás confesiones religiosas minoritarias.

Es interesante mencionar en este apartado que algunos autores entienden que el modelo adoptado para facilitar la asistencia religiosa (sea el que fuere), particularmente en lo referente a la Iglesia Católica, es un modelo heredado del antiguo régimen¹⁴, eso sí, modificándose el fundamento y el fin de la asistencia religiosa de conformidad con los nuevos principios constitucionales establecidos. Anteriormente la asistencia religiosa católica se entendía como un sistema que pretendía satisfacer las necesidades pastorales de una determinada confesión, pero no desde la perspectiva de los derechos del ciudadano pues estos pasaban a segundo plano; sino desde un aspecto más bien institucionalista. En cambio, hoy día, la asistencia religiosa se entiende como un derecho del individuo y, desde el punto de vista del Estado, es el derecho de la persona lo que justifica su intervención en esta materia¹⁵. Por su parte, las confesiones religiosas, son las encargadas de facilitar la asistencia espiritual a aquellas personas que lo solicitan por voluntad propia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la asistencia se presta, como ya se ha dicho, en situaciones de especial sujeción, por ello es preciso que los poderes públicos competentes intervengan para facilitar a la confesión la prestación de la ayuda espiritual solicitada, pues el Estado tiene el deber instrumental de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales.

3. Modelos de asistencia religiosa

La asistencia religiosa se puede prestar de distintas formas. Por este motivo en este punto analizaremos los distintos modelos de asistencia religiosa para determinar qué forma de organización se aconseja seguir a fin de hacer efectivo el derecho a la asistencia religiosa. *A priori*, el modelo de organización elegido depende exclusivamente de lo que pacte el Estado y la respectiva confesión y por supuesto, de las concretas circunstancias según el ámbito en el que se ha de prestar la asistencia

¹³ Cfr. MANTECÓN, J., “La asistencia religiosa penitenciaria en las normas unilaterales y acuerdos con las confesiones”, en *Ius Canonicum*, 37 (1997), p., 573-575.

¹⁴ Cfr. MOTILLA, A., IBÁN, I. C., PRIETO SANCHÍS, L., *Manual de Derecho eclesiástico*, op., cit., p., 263.

¹⁵ Cfr. FUENTES, G., “Laicidad del Estado y derecho a la asistencia religiosa”, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 3 (1987), p., 305; CONTRERAS, J. M., *El régimen jurídico de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas en el sistema español*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, p., 514.

religiosa. López Alarcón hace un apunte de especial importancia en este tema, pues él entiende que *"sobre todo, se establecen los modelos de asistencia religiosa en correspondencia con los principios que sustenta el Estado respecto del fenómeno religioso"*. El autor apunta que, por ejemplo, el Estado liberal se desentiende de la asistencia religiosa mientras que el Estado confesional autoritario tiende a imponer modelos organizativos de integración e incluso de identificación de servicio espiritual y asistencia religiosa empleándolos como medio de instrumentalización para fines políticos; por otra parte, en los regímenes democráticos, el Estado social tiene la obligación de promover modelos inspirados en la obtención de una asistencia religiosa funcional y eficaz para todas las personas individualmente y grupos religiosos en los que se integran¹⁶.

Es importante saber que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica 5/1980, de 7 de julio, de Libertad religiosa, señalan la concreta forma en la que se debe organizar la asistencia religiosa. Por lo tanto se plantean distintas soluciones en función de razones prácticas y de oportunidad. Hay cuatro modelos de organización. A saber, el modelo de integración orgánica, el modelo de relación contractual, el de libre acceso y el de libertad de salida. A continuación procederemos a explicar brevemente cada modelo.

a) Integración orgánica. Conforme a este modelo, los ministros de culto, que son los encargados de prestar la asistencia religiosa, se incorporan en la Administración Estatal, ya sea civil o militar, pasando a formar parte del cuerpo de funcionarios públicos. Hay que tener presente que este sistema fue abolido en su totalidad.

b) Relación contractual o concertación. Es el modo de organización que comienza tras poner fin al modelo anterior. De acuerdo con este modelo, la asistencia religiosa se facilita mediante un contrato con el ministro de culto. Hay que tener en cuenta que este modelo tiene distintos matices según los ámbitos concernidos. El contrato se puede perfeccionar con independencia de que exista, o no, un convenio entre la institución o centro y la confesión religiosa de la que se trate mediante el cual se comprometan ambas partes, a aportar recursos tanto humanos, como materiales. De existir el convenio, se ha de describir de forma detallada cómo se prestará a la asistencia religiosa, los medios que se aportarán, horarios, etc., para así poder coordinar el servicio de asistencia religiosa con las actividades del centro

¹⁶ LOPEZ ALARCÓN, M.; "Asistencia religiosa", en FERRER ORTIZ, J. (coord.), *Derecho Eclesiástico del Estado Español*, Eunsa, Pamplona, 2007, p., 252 – 255.

penitenciario, en nuestro caso. Es relevante tener en cuenta que en este sistema, la realización de la asistencia religiosa no conlleva cargas para la confesión, pues el ministro de culto recibe su sueldo del centro o institución.

c) Libre acceso. En este caso no existe ninguna vinculación jurídica entre la administración del centro penitenciario y la confesión o sus ministros, pues el Estado tan sólo se limita a facilitar la entrada a los ministros de culto a los centros públicos para auxiliar espiritualmente a los internos. Este sistema vale para todas las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas en España, y es el que se emplea en modo particular en los centros penitenciarios.

d) Libertad de salida. Este tipo organizativo implica la autorización del interno por parte de la administración o del centro, a salir del mismo para ejercer su derecho a la asistencia religiosa. Aunque hay que tener presente que este modelo no puede utilizarse en todos los supuestos, ya sea debido a las circunstancias en las que se encuentre la persona interesada (es el caso de los hospitalizados), o por las características del centro donde se encuentre interno el interesado. Esto implica que este modelo organizativo no se podría aplicar en los centros penitenciarios. Se debe tener presente que este sistema también puede ser utilizado por miembros de las confesiones no inscritas en el Registro de Entidades Religiosas en España¹⁷.

Ya hemos mencionado anteriormente que el modelo de asistencia religiosa establecido para la Iglesia Católica es un sistema heredado del sistema pasado y, por tanto, se entiende que en principio podría ser poco acorde con los nuevos principios constitucionales. Además, a todo esto se suma el hecho de que este modelo confesional heredado se conserva prácticamente intacto hasta 1985 en el sistema sanitario público¹⁸, hasta 1989 en las Fuerzas Armadas¹⁹; y hasta 1993 en los establecimientos penitenciarios²⁰. La explicación que postula Souto a la pervivencia de situaciones preconstitucionales, sostiene que en los procesos reformistas que pretenden cambiar el sistema político "*suprimen y eliminan sólo lo radicalmente incompatible con el nuevo*

¹⁷ Cfr., GOTI ORDEÑANA, J., *Sistema de Derecho Eclesiástico...* cit. p., 764.

¹⁸ Vid. Orden de 20 de diciembre de 1985 que publica el Acuerdo sobre la Asistencia religiosa católica en hospitales públicos, de 24 de julio de 1985 (BOE núm. 305, de 21 de diciembre).

¹⁹ Vid. Ley 17/1989, de 19 de julio, de Régimen del Personal Militar Profesional (BOE núm., 172 de 20 de julio).

²⁰ Cfr. Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Penitenciario (BOE núm. 40, 15 de febrero); MORENO, M., "La asistencia religiosa católica en centros penitenciarios. Comentario al Acuerdo de 20 de mayo de 1993 entre el Presidente de la CEE y el Ministerio de Justicia", en *Revista Española de Derecho Canónico*, 51 (1994), p., 199-216.

sistema. Los procesos de transformación posteriores podrán depurar instalaciones que han devenido obsoletas, pero sin establecer principios apriorísticos de demolición de las instituciones precedentes"²¹. Prácticamente es lo que sucedió, pues se eliminaron los aspectos incompatibles con la nueva situación jurídica y política, pero se mantuvo la estructura organizativa básica, es decir, una estructura basada en un sistema de capellanías estables en el ámbito de los centros penitenciarios, en el seno de las Fuerzas Armadas y en los hospitales públicos, en el caso de la religión católica.

Por tanto, como ya mencionamos anteriormente, se procedió a abolir el sistema de integración orgánica (pues ese modelo abarcaba a los ministros de culto, encargados de ofrecer la asistencia religiosa, como a militares y funcionarios)²², y se extendió a los miembros de las confesiones religiosas minoritarias. Así, se fueron promulgando normas que disponían la asistencia religiosa pluriconfesional o indiscriminada en los establecimientos penitenciarios²³, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en los centros escolares y en los hospitales públicos. Tenemos que revelar que en el desarrollo de las normas, tanto unilaterales como convencionales, se marcan claramente pautas distintas en lo que se refiere a la Iglesia católica y las demás confesiones minoritarias. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia católica se conserva el sistema de Capellanía en los establecimientos públicos, tan solo cambiando el régimen jurídico y laboral de los asistentes religiosos. Por ejemplo, en el caso de la Administración Penitenciaria, si de la Iglesia católica se trata, los capellanes son designados por el Ordinario y autorizados formalmente por la Dirección del Centro, corriendo la propia Administración con los gastos personales y materiales. Pero en el caso de las confesiones minoritarias, ya que no tuvieron previamente ningún régimen jurídico específico, se prefirió adoptar el sistema de libre acceso²⁴.

²¹ Cfr. SOUTO, J. A., *Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2003, p., 590.

²² Vid. Art. 54 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (BOE núm. 239, de 5 de diciembre); arts. 180 y 181 del Real Decreto 1201/1981, del Reglamento penitenciario (BOE núm. 40, de 23-25 de junio); Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982, de 13 de mayo, en que resolvió el recurso de inconstitucionalidad entre la Ley 48/1981, de 24 de diciembre, que regulaba los ascensos en el Ejército en la que se incluía el Cuerpo de Capellanes Castrenses.

²³ Cfr. Orden de 24 de noviembre de 1993 por la que se dispone la publicación del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los Establecimientos penitenciarios (BOE núm. 298, de 14 de diciembre); Cfr. MANTECÓN SANCHO, J., *La asistencia religiosa penitenciaria...* cit., p., 590-595; MORENO, M., *La asistencia religiosa católica en centros penitenciarios...* cit., p., 199-216.

²⁴ Vid. arts. 8 y 9 de las Leyes 24, 25 y 26 de 1992, de 19 de noviembre (BOE de 11 de noviembre), por las que se aprueban los Acuerdos de cooperación firmados con la Federación de Comunidades Israelitas (FCI) – en la actualidad se denomina Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) –, y Comisión Islámica en España (CIE).

Ciertamente las únicas novedades que se estipularon con la firma de los acuerdos de cooperación con la Federación de la Iglesias Evangélicas, con la de Comunidades Judías y con la Comisión Islámica, fueron los de establecer un sistema de designación de los asistentes religiosos o ministros de culto por parte de la confesión y de autorización por parte de la Administraciones competentes, garantizándoles el acceso libre a los centros sin limitación de horario²⁵. No es nuestra intención detenernos mucho en el tema de la financiación pues se prevé un apartado específico para este asunto, pero consideramos sugestivo señalar que, a diferencia de lo que sucede con la Iglesia católica, los gastos ocasionados por el ejercicio de la asistencia religiosa para las confesiones minoritarias corren por cuenta de la propia confesión²⁶. Tan sólo en el acuerdo con la Comisión Islámica se prevé una posible cooperación económica mediante convenios entre la Dirección de los centros y dicha Comisión²⁷. No obstante, esta cooperación no es posible llevarla a cabo en la práctica, ya que los centros penitenciarios no tienen personalidad jurídica, y por tanto carecen de autonomía financiera propia²⁸. En consecuencia, la doctrina coincide en su mayoría en afirmar que salvo estas precisiones mínimas, los acuerdos no implican novedad alguna importante al régimen general²⁹.

II. NOCIONES GENERALES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA EN CENTROS PENITENCIARIOS

1. Nociones generales

1.1. Fundamento

Tal y como adelantamos anteriormente, la asistencia religiosa que estudiamos no es la común, pues nos ocupamos de aquella asistencia espiritual reclamada en

²⁵ Vid. MANTECÓN SANCHÓ, J., *Los Acuerdos del Estado con las Confesiones acatólicas*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, Jaén, 1995, p., 52-56; OLMOS, M. E., “La asistencia religiosa, en VV. AA”, *Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1994, p., 189-208.

²⁶ Cfr. arts. 9.4 y 9.3 de los Acuerdos firmados con la FEREDE y la FCJE, respectivamente.

²⁷ Así, el art. 9.3 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, sostiene: “*Los gastos que origine el desarrollo de la asistencia religiosa serán sufragados en la forma que acuerden los representantes de la «Comisión Islámica de España», con la dirección de los centros y establecimientos públicos contemplados en el número 1 de este artículo, sin perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin, existan en dichos centros o establecimientos.*”

²⁸ Cfr. MANTECÓN SANCHÓ, J., “El Islam en España”, en *Conciencia y Libertad*, 13 (2011), p 72.

²⁹ Vid. LIAMAZARES, D., “Los acuerdos y el principio de igualdad; comparación con los acuerdos con la Iglesia católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo”, en *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias en VV.AA.*, (coords. V. REYNA y M. A. FÉLIX), BALLESTA, Madrid 1996, p., 204.

situaciones de especial sujeción o, si se prefiere, asistencia religiosa especial³⁰, entendiendo por ella la que se presta por las confesiones con la ayuda de los poderes públicos, ya que sus destinatarios tienen sus derechos limitados por actos o hechos de diversa índole. No obstante, es muy importante tener en cuenta que, si bien el Estado tiene el mandato de asistir a los titulares del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, esto “*no implica que sea el Estado quién presta dicha asistencia, sino las confesiones, a través de sus ministros de culto correspondientes, por lo que el Estado únicamente actúa de intermediario para facilitar con todos los medios a su alcance que se garantice el derecho a recibir la asistencia religiosa en estos centros públicos de especial dependencia*”³¹.

Entre las características más reseñables de la asistencia religiosa se puede enumerar la situación de sujeción especial en la que se halla el individuo, el hecho de que los establecimientos tienen carácter público³² y la necesaria actuación estatal. No obstante, desde la perspectiva estatal se puede ofrecer también una definición de esta asistencia religiosa. Así, López Alarcón la define como “*la acción del Estado para establecer la infraestructura y las condiciones adecuadas para que puedan recibir asistencia espiritual directa de sus respectivas concesiones los ciudadanos que tienen disminuidas las posibilidades de recibirla por encontrarse internados en centros caracterizados por un régimen de especial sujeción*”³³.

Como bien es sabido, España es un Estado social, lo cual implica que tiene que facilitar la asistencia religiosa solventando cualquier impedimento que dificulte el correcto desarrollo de esta. No obstante, él, no sé implica de forma directa, ni debe hacerlo; pues ésta es una de las funciones que le competen a las confesiones religiosas.

Nos parece acertado finalizar este punto recordando que el fundamento del auxilio religioso consiste en la necesidad de promover la libertad y la igualdad en el

³⁰ Cfr. SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, À., *Prisiones y libertad religiosa. Análisis del nuevo régimen jurídico (estatal y autonómico) de la libertad religiosa penitenciaria*, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, p., 34.

³¹ Vid. OLMOS ORTEGA, M^a, E., “La asistencia religiosa”,... op., cit., p., 193.

³² Aunque nos referimos a establecimientos penitenciarios públicos, se entiende que en los establecimientos privados el Estado también habrá de respetar el derecho de toda persona a la asistencia religiosa. (Cfr. CONTRERAS MAZARIO, J. M^a., *La asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ordenamiento jurídico español*, vol. II, Universidad Complutense, Madrid, 1988, p., 915).

³³ Cfr. LÓPEZ ALARCÓN, M., “Asistencia Religiosa”, en VV.AA., *Derecho eclesiástico español*, 6^a ed., Euns, Pamplona, 2010, p., 249 – 250.

plano religiosas con la finalidad de erradicar discriminaciones respecto de los creyentes, ya sean pertenecientes a confesiones distintas o, a la misma confesión³⁴.

1.2. Titularidad

Ya hemos hecho mención en varias ocasiones a la titularidad del derecho fundamental de libertad religiosa, pero no nos hemos detenido en profundidad para abordar este tema. Debemos aceptar que dentro de la doctrina no hay mucha uniformidad³⁵, puesto que la titularidad de este derecho se designa a distintos sujetos; no en base a criterios objetivos, sino “*variando en función de la naturaleza jurídica que tomemos en consideración y del ordenamiento jurídico que utilicemos como punto de referencia*”³⁶ así pues, en un Estado confesional, es la propia confesión religiosa la titular del derecho a la asistencia religiosa; y es ella misma quién solicita al Estado que preste dicha asistencia para que se pueda extender la religión de que se trate. Pero en un Estado como el nuestro, es decir promocional, que tiene por objetivo proteger el derecho de libertad religiosa es el particular el titular del derecho de libertad religiosa, lo cual faculta al sujeto para “*reclamar al Estado que faciliten los medios para que la asistencia religiosa sea efectiva, lo cual, obviamente, exigirá de la colaboración de la confesión afectada*”³⁷.

Por todo esto no se puede perder de vista que quien presta de forma directa la asistencia son las propias confesiones religiosas y, por lo tanto, el Estado no es más que un intermediario entre las confesiones y los creyentes (que son, como dijimos, los titulares del derecho).

En cambio sí que podemos hablar de una cotitularidad del derecho³⁸; pero ésta la comparten las personas individuales y las confesiones religiosas³⁹, teniendo en cuenta que éstas son las encargadas de prestar el servicio al ciudadano que lo precise, recayendo sobre el Estado sólo la obligación de facilitar esta prestación.

³⁴ PARDO PRIETO, P., C., *Laicidad y Acuerdos del Estado con Confesiones religiosas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p., 34 – 37.

³⁵ Cfr. SATORRAS FIORETTI, R. M^a., *El derecho a la asistencia religiosa en los tanatorios*, J. M. Bosch, Barcelona, 2004, p., 44 – 52.

³⁶ Vid. CONTRERAS MAZARIO, J. M^a., *La asistencia religiosa...*, op., cit., p., 1148 – 1149.

³⁷ Vid. IBÁN. I. C., PRIETO, L., y MOTILLA, A., *Derecho eclesiástico*, Mc Graw-Hill, Madrid, 1997, p., 143.

³⁸ Cfr. MOLANO, E., “La asistencia religiosa en el Derechos eclesiástico del Estado español”, *Persona y Derecho*, núm. 11, 1984, p., 231 – 232.

³⁹ Cfr. MARTÍ SÁNCHEZ, J. M^a., “Presupuestos y regulación de la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. X (1994), p 302.

Desde otro punto de vista, Contreras Mazario⁴⁰ entiende la asistencia religiosa como una garantía positiva o como una necesaria expresión de la actividad promocional del Estado. En este caso, los poderes públicos serían los titulares activos; los destinatarios de la asistencia serían los titulares pasivos; y las confesiones religiosas y los ministros de culto serían los instrumentos de la actividad. Recordemos que a los ministros de culto se les conoce también como instrumentos mediados, ya que son los que realmente realizan las actividades que comprende este derecho.

1.3. Destinatarios

1.3.1. Iglesia Católica

Ha llegado el momento de centrarnos en los destinatarios de la asistencia religiosa. Tal y como pone de manifiesto el art. 1 del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los establecimientos penitenciarios, de 20 de mayo de 1993, los destinatarios de la asistencia religiosa católica son los reclusos.

Es interesante observar -pero da igual de manera nada preocupante pues tiene su diligente explicación-, que el citado Acuerdo del 93, a diferencia del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en hospitales públicos de 1985 y del Acuerdo marco catalán sobre asistencia religiosa católica penitenciaria de 1987, no prevé como beneficiarios de la asistencia religiosa ni a los trabajadores de la prisión ni a los familiares de los reclusos, cosa que si hacen los otros dos Acuerdos. Como decíamos, esta falta de mención, en opinión de Payá Rico⁴¹, es oportuna y lógica, ya que estas personas no sufren limitación alguna de sus derechos de manera que se hallen en una situación de especial sujeción y precisen de manera real que el Estado actúe como intermediario en aras de ofrecerles una asistencia religiosa más allá de la que corresponda en cualquier otra situación en la que concurren razones de oportunidad y conveniencia para que se preste la misma como por ejemplo, en centros escolares como complemento a la enseñanza religiosa⁴².

La segunda cláusula del Acuerdo de 1987 y del anexo I del Acuerdo de 1993 garantizaba el servicio permanente de asistencia religiosa católica; además, este último

⁴⁰ Vid. CONTRERAS MAZARIO, J. M^a., La asistencia religiosa..., op., cit., p.1149 – 1151.

⁴¹ Cfr. PAYÁ RICO, A., *Libertad religiosas en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros*, Ediciones Laborum, 2017, p., 175.

⁴² Vid. MORENO ANTÓN, M., “La asistencia religiosas católica en centros penitenciarios. Comentarios al Acuerdo de 20 de mayo de 1993 entre el Presidente de la CEE y el Ministro de Justicia”, *Revista Española de Derecho Canónico*, vol. 51, 1994, p., 209.

disponía como mínimo la presencia de un capellán a tiempo completo cuando el centro penitenciario tuviera hasta 250 internos.

Se ha de tener en cuenta que a pesar de que el acuerdo de 1993 no configura de manera expresa la asistencia religiosa católica como un servicio más del centro penitenciario, éste detalla minuciosamente el régimen jurídico de la asistencia católica aunque técnicamente no lo articula como un servicio más del centro; en opinión de Moreno Antón, probablemente se ha obrado de tal manera para evitar que dicha prestación pueda confundirse con un servicio estatal⁴³.

Indiscutiblemente, este último acuerdo concluyó con el Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias por mandato del art. 50 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) núm. 313, de 31 de diciembre), poniéndose fin al histórico modelo de integración orgánica para dar lugar al prototipo de concentración.

1.3.2. Confesiones minoritarias

1.3.2.1. Con acuerdo de cooperación

De igual forma que ha ocurrido con la Iglesia católica, las religiones minoritarias que suscribieron acuerdos de cooperación con el Estado, tienen su propio régimen de asistencia religiosa penitenciaria. Los acuerdos de 1992 con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (en adelante FEREDE), la Federación de Comunidades Judías de España (en adelante FCJE) y con la Comisión Islámica de España (en adelante CIE), establecen en sus respectivos arts. 9 que los beneficiarios de la asistencia religiosa penitenciaria son los propios internos.

Es importante tener en cuenta que los acuerdos mencionados y el Real Decreto de desarrollo⁴⁴ se aplica a las iglesias, comunidades y confesiones religiosas que hayan realizado la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas y, que además, forman parte de las federaciones que han firmado los pactos con el Estado.

Recordamos que los acuerdos con la FCJE y CIE estipularon dentro de su articulado la obligación legal para el centro penitenciario de transmitir a la

⁴³ Vid. MORENO ANTÓN, M., “La asistencia religiosa católica en centros penitenciarios...”, op., cit., p., 208; RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios*, Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica, Madrid, 2008, p., 77.

⁴⁴ Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la comisión Islámica de España, en el ámbito de la asistencia religiosa.

correspondiente comunidad judía o islámica aquellas solicitudes de asistencia religiosa que se presenten ante ellos por los propios internos o sus familiares cuando estos no estuvieran en condiciones de hacerlo directamente. Aunque esta opción no aparezca explícitamente en el acuerdo con la FEREDE, Rodríguez Blanco entiende que esta garantía se aplica también a los internos evangélicos. Sostiene que "*así se deduce del principio constitucional de libertad religiosa y de la obligación de los poderes públicos de interpretar las normas en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales*"⁴⁵.

1.3.2.2. Sin acuerdo de cooperación

En cuanto a las confesiones religiosas que no hayan suscrito ningún acuerdo de cooperación con el Estado, nos debemos referir a la Instrucción 6/2007, de 21 de febrero, que se hace eco del art. 230.1 del Reglamento Penitenciario al extender el auxilio religioso para todas las confesiones religiosas que figuren como tal inscritas en el Registro de Entidades del Ministerio de Justicia sin más limitación que la que comporta el debido respeto a la esfera individual de derechos fundamentales de las demás personas.

En este caso, los destinatarios -los internos en centros penitenciarios-, si desean recibir asistencia religiosa de su propia confesión deberán dirigir una solicitud a la dirección del centro penitenciario. A los efectos de facilitar la organización de la asistencia solicitada, la dirección del centro deberá gestionar la solicitud de manera que ésta llegue, o bien, al ministro del culto correspondiente acreditado antes el centro, o, si la confesión no tuviera uno, se deberá transmitir la solicitud a la correspondiente confesión religiosa para que ésta pueda acreditar a un ministro de culto⁴⁶.

En opinión de Payá Rico, establecer este criterio cómo punto de referencia para cumplir con el deber de facilitar la asistencia religiosa a los reclusos (por su especial situación de sujeción), es inadecuado pues así se produce una transgresión a lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria (en adelante LOGP), en la LORL y en el art. 16.1 CE⁴⁷.

No obstante, en nuestra opinión, si bien es verdad que el deber de asistir espiritualmente a los internos no se debe subyugar a criterios discrecionales a fin de

⁴⁵ Cfr. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios...*, op., cit., p., 44.

⁴⁶ Cfr. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios...*, op., cit., p., 78.

⁴⁷ Cfr. PAYÁ RICO, A., *Libertad religiosas en centros penitenciarios...*, op., cit., p., 174.

respetar el principio de igualdad, entendemos que solicitar un trámite que no comporta complicación alguna para la confesión tiene su justificación objetiva por razones prácticas.

En primer lugar, el único cauce previsto para que la confesión goce de personalidad jurídica pasa necesariamente por la inscripción de dicha confesión en el Registro público creado a tal efecto. No olvidemos que la personalidad jurídica atribuye la titularidad de deberes y obligaciones y habilita al sujeto, en este caso, a la entidad religiosa, para que pueda obrar legalmente en el tráfico jurídico.

Y en segundo lugar, no podemos perder de vista el ámbito que estamos tratando, puesto que los destinatarios de la asistencia religiosa se encuentran internados, (evidentemente en contra de su voluntad) en un centro penitenciario público del cual responde (en última instancia) el Estado por el buen funcionamiento del mismo y el cumplimiento de sus objetivos, parece más que natural y legítimo que precise actos fehacientes por los que se haga constar su "*establecimiento en España, [...] sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcionamiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación*"⁴⁸. De igual manera, se puede observar que la dirección del centro penitenciario no se reserva ninguna prerrogativa o cualquier tipo de margen de actuación para decidir si la confesión religiosa de la que se trate es apta o no para acreditar a un ministro de culto que pueda asistir a sus fieles en los centros penitenciarios.

2. Evolución histórica de la asistencia religiosa penitenciaria en España

Uno de los temas que deseamos abordar en este estudio es el de la evolución que ha experimentado la asistencia religiosa penitenciaria pues, tal y como afirma Beristain Ipiña "*merece estudiarse, en el mundo eclesiástico y fuera de él, para conocer mejor el significado de la norma actual y para constatar que a lo largo de tantos años tanto España como Francia, como otros países, han ido introduciendo cambios notablemente positivos en la legislación y en la práctica*"⁴⁹.

⁴⁸ Vid. Art. 5 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (BOE núm. 177, de 24 de julio de 1980).

⁴⁹ Cfr. BERISTAIN IPIÑA, A., "Asistencia religiosa. Derechos religiosos de los sancionados a penas privativas de libertad", en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.) y BAJO FERNÁNDEZ, M., (Coord.), *Comentarios a la legislación penal*, Tomo VI, vol. 2º, Edersa, Madrid, 1986, p., 816.

Abordaremos algunas normas relevantes y prácticas religiosas que han tenido lugar en nuestras cárceles, presidios, galeras, casas de corrección, etc., para así comprender mejor la situación contemporánea desde la perspectiva evolutiva que ha experimentado la asistencia religiosa como materia o doctrina.

2.1. La asistencia religiosa durante los siglos XVI – XVIII

Nos parece relevante empezar este apartado recordando que Carlos I y Doña Juana de Castilla promulgaron una ley⁵⁰, en la instrucción para los alcaldes mayores de los Adelantamientos, que se aplicó estrictamente a la reclusión preventiva en el ámbito carcelario, en la que se preveía que *“en las cárceles haya camas para los presos pobres; y se les diga misa los días festivos [...] que los domingos y fiestas de guardar les hagan decir misa: lo cual todo se haga y pague á costa de las penas que se aplican para los gastos de Justicia; y que cerca dello tengan especial cuidado”*.

De igual modo, el doctor Bernardino de Sandoval, en una obra que se remonta a 1564, se dirige a los obispos y demás eclesiásticos para recordarles su obligación de practicar la misericordia ocupándose de las necesidades materiales y espirituales de los presos más desfavorecidos.

Thomás Cerdán de Tallada, un reputado jurista valenciano del siglo XVI, realizó varios trabajos en esta materia. Una de las obras más destacadas es *“Visita de la cárcel y de los presos”*, publicada en 1574⁵¹. En el I Congreso Penitenciario español, se hace referencia a dicha obra. En una de las ponencias se afirma que el trabajo de Cerdán de Tallada, concilia o, enlaza *“los sentimientos de compasión hacia los encarcelados, con las exigencias de la disciplina en las Prisiones. Según él, la primera obligación del hombre, después de su gratitud a Dios, que le ha dado el ser y le conserva la vida, es hacer bien al prójimo, pero especialmente a los que más padecen, que son los presos. El que no se interesa por los demás, debe ser aborrecido, como elemento inútil a la república, y para justificar estos criterios invoca la doctrina de los Evangelistas, las Bienaventuranzas, sentencia de los Santos Padres y textos de la Sagrada Escritura”*⁵².

⁵⁰ Integrada con el núm. XIV del Título XXXVIII, del Libro XII, de la *Novísima Recopilación*.

⁵¹ Se ha manejado la edición: CERDÀ DE TALLADA, T., *Visita de la cárcel y de los presos*, Edició a cura de Teresa Canet Aparisi, Universitat de València, 2008.

⁵² Cfr. CADALSO, F., “Discurso en homenaje al insigne jurisconsulto Tomás Cerdán de Tallada”, en *Antecedentes y Crónica del Primer Congreso Penitenciario Español, octubre de 1909*, Imprenta la Gutenberg, Valencia, 1920, p., 61.

Asimismo, Cristóbal de Chaves recoge en su obra *“Relación de la cárcel de Sevilla”*⁵³, de 1585, cómo las Cofradías ofrecían ayuda a los Capellanes en la labor de asistencia religiosa. Sanz Delgado entiende que es evidente la interrelación que se pone de manifiesto (al departir sobre el capellán mayor y el menor) entre la cura del alma y el consuelo de los enfermos; de igual manera, entre la actividad religiosa y la enfermería⁵⁴.

En cuanto a las parroquias y a sus respectivos párrocos, éstas también tuvieron su relevancia en lo que a la asistencia espiritual de los presos se refiere. Por ejemplo, en Valencia *“desde antiguo las respectivas parroquias desplegaron su celo apostólico sobre los presos internados en establecimientos sitos dentro de su demarcación parroquial”*⁵⁵. Especial relevancia tuvo el sínodo diocesano celebrado en Valencia en el año 1657 (siendo arzobispo D. Fr. Pedro de Urbina) pues fue cuando se estableció que los párrocos tengan la obligación de llevar *“el Santísimo a los enfermos, y demás impedidos, que legítimamente no han podido acudir a la iglesia, y también a los presos de las cárceles, donde no hubiere Capilla en que fe celebre Miffa, para comulgarlos”*⁵⁶.

No podemos tratar este intervalo de historia penitenciaria desde las perspectiva asistencial espiritual sin referirnos a la Real Cárcel de Cádiz, puesto que la *“Instrucción formada para el gobierno de la Real Cárcel de esta ciudad de Cádiz y funciones propias de su alcaide”* de 1795 es la primera en señalar las competencias de los eclesiásticos en este ámbito. Entre éstas se pueden enumerar la piedad, el establecimiento diario en el centro penitenciario, practicar la misericordia, decir Misa los días festivos, proveerá rosarios, libros de catecismo. Y entre otras cosas también se le exigía asistir de noche en la cárcel cuando hubiera algún enfermo que se le haya administrado el Santo Viático. A su vez, se fija que el alcaide debe presenciar a todos los actos religiosos *“para que se executen con la seriedad y circunspeccion debida,*

⁵³ Cfr. DE CHAVES, C., *Relación de la cárcel de Sevilla*, 1585 (se ha utilizado la edición de Cásicos Árbol, José Esteban Editor, Madrid, 1983), p., 11.

⁵⁴ Vid. SANZ DELGADO, E., “La asistencia religiosa en la ejecución penal hasta el siglo XX”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXV, 2009, p., 116.

⁵⁵ Cfr. LLORCA ORTEGA, J., *Cárceles, presidios y casas de corrección en la Valencia del XIX (Apuntes históricos sobre la vida penitenciaria valenciana)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, p., 311.

⁵⁶ Cfr. *Constituciones sinodales del Arzobispado de Valencia, Hechas por el Ilustmo. Y Exmo. D. Fr. Pedro de Urbina, Arzobispo de la S. Metropolitana Iglesia de Valencia, Del Confejo de su Magestad, et. En la Sinodo que celebrò en dicha Ciudad en 22 de abril de 1657*, Bernardo Nogués, Valencia, 1657, p., 51. Disponible en la siguiente dirección: <http://bvpb.mcu.es/es/consult/registro.cmd?id=405439>, última consulta realizada el 11/06/18.

reprehendiendo y castigando à los indevotos, y auxiliando y sosteniendo todas las operaciones del Padre Capellan”⁵⁷.

Hasta que el Cuerpo de Galeras fue suprimido de 1748 a 1784, todo el tiempo que duró la pena de galeras, es decir, desde 1530 hasta 1803, la asistencia religiosa estuvo presente mediante oraciones los sacramentos, la extremaunción, penitencia y eucaristía. Este auxilio espiritual se ofrecía principalmente por los capellanes. En cuanto a los gastos que se ocasionaban a raíz de dicha asistencia, se sufragaban con los ingresos que se obtenían a raíz de la disminución que sufría la ración de los forzados y esclavos, de los donativos que daban la gente de galeras, de las colectas que se hacían en los puertos donde las galeras se anclaban y por las multas impuestas por faltas en el servicio⁵⁸.

En lo relativo a las obligaciones de los capellanes, el Capitán General de las galeras de España, Marqués de Sta. Cruz, dictó una Instrucción especial el 3 de enero de 1680, que trataba este asunto; y mandando a D. Bernardo Fan, capellán mayor de las galeras, que la diera cumplimiento y se encargará de que los demás capellanes sujetos a su jurisdicción también lo hicieran. El texto preveía que “[...] *todos los domingos del año, desde el siguiente á la publicación de esta resolución, sean obligados todos los capellanes de la galera Capitana, Patrona y las demás, á ir cada uno á la suya y haciendo señal con la campana con se ejecuta el Avemaría, congregar á toda la gente de mar y guerra que se hallase en ella, y particularmente á a la chusma, y ejercitando el empleo de la cura de almas, explicar el punto ó artículo de la doctrina cristiana que le pareciese por espacio de una hora, más o menos de su arbitrio, haciéndoles memoria de las oraciones y artículos que están obligados á saber*”⁵⁹.

2.2. La asistencia religiosa durante el siglo XIX

El siglo XIX supuso por primera vez que la asistencia religiosa fuera considerada como una actividad específica en sí misma destinada a las personas ingresadas en los establecimientos penitenciarios. Eso sí, en principio solo se enfocaba a las personas detenidas por orden de la autoridad religiosa, sin que tenga una relación directa con la posibilidad de corrección del penado. Ahora el cargo de capellán,

⁵⁷ Disponible en la siguiente dirección: <http://www.acaip.es/areas/legislación/hitória/3225-instruccion-para-el-gobierno-de-la-real-carcel-de-cadiz-1795#7/zoomed>, última visita realizada el 11/06/18.

⁵⁸ Vid. SEVILA Y SOLANAS, F., *Historia penitenciaria española (La Galera)*, El Adelantado de Segovia, Segovia, 19147, p., 193.

⁵⁹ Ídem., p., 197.

compone una de las figuras más importantes dentro de la estructura organizativa del centro penitenciario. Sí bien es verdad que la misión del capellán en principio se enfocaba hacía la asistencia espiritual buscando la corrección y enmienda del penado, sería una omisión desafortunada no admitir que realmente *“tuvo una participación activa y decisiva en el devenir de la vida penitenciaria”*⁶⁰.

En este paraje debemos mencionar la trascendental Ordenanza General de los Presidios del Reino, de 1834. Supuso un punto de inflexión en la asistencia religiosa, pues fue el primer texto legal que regulaba todo lo referente a la figura del capellán (en los artículos 158 a 166 de la Sección Primera del Título V), bajo la rúbrica de Asistencia espiritual y sanitaria. El texto preveía el nombramiento de Capellanes, locales para la asistencia religiosa, la necesidad de que el capellán resida permanentemente, a ser posible, dentro del presidio, las obligaciones del capellán, etc.

Por razones evidentes no nos podemos detener en exceso sobre el articulado de esta Ordenanza, pero sí que deseamos enumerar las obligaciones del capellán, (recogidas en el artículo 165) con la finalidad de ampliar la información sobre la figura del capellán. El mencionado precepto establecía que el capellán debe *“1ª. Cuidar de acuerdo con el comandante, de que cumplan con el precepto Pascual todos los individuos que habitan en el presidio. 2ª. Explicar en las festividades mayores, Domingos de Cuaresma y otros días festivos la doctrina cristiana á los Capataces, Cabos y Confinados, inculcando á estos la necesidad de las buenas costumbres. 3ª. Auxiliar á los presidiarios condenados á la pena de muerte, y hacer cada vez que una de esta sentencia se ejecute, una exhortación á tener igual desventurado fin. 4ª. Visitar con frecuencia á los enfermos que haya en la enfermería del establecimiento, y una vez á la semana los del hospital, y siempre que se ha llamado por alguno de ellos, procurando consolar les en sus penas y aflicciones. 5ª. Cuidar de que todas las tardes se rece el Rosario en la enfermería, á cuyo acto asistirán también los sirvientes. 6ª. No permitir que á los presidiarios ni otra persona alguna del establecimiento se les dé sepultura en la Iglesia ó Capilla del mismo, avisando al Director General cuando no haya cementerio público, para que con la brevedad posible haga construir uno especial para los presidiarios. 7ª. En fin, cuidar muy especialmente de los presidiarios jóvenes,*

⁶⁰ Cfr. GARCÍA VALDÉS, C., *La ideología correccional de la reforma penitenciaria española del siglo XIX*, Edisofer, Madrid, 2006, p., 106 – 107.

á quiénes procurarán imbuir las máximas de religión y de moral que tan eficazmente deben contribuir á la corrección de sus costumbres”.

Parece especialmente relevante referirnos a la realidad que refleja Vicente Boix en 1850 del Presidio Correccional de Valencia⁶¹. *“Cuando describe el presidio, habla de la iglesia del establecimiento como un recinto donde se respira tranquilidad y en el que el alma se apacigua “después de las borrascas del crimen, de los peligros y de los calabozos. [...]””*⁶².

También debemos mencionar la Ley de 26 de julio de 1849, ya que establece un régimen general de prisiones, cárceles y casas de corrección. Especial importancia tiene su artículo 35 dispone que el Gobierno *“formará los reglamentos convenientes para su ejecución y sobre la policía y disciplina de las prisiones. En los mismos se prescribirán también los medios oportunos para que los presos cumplan con sus deberes religiosos”*.

Otro autor que contribuye a la evolución de la asistencia religiosa fue el arquitecto Tomás Aranguren mediante la publicación de una obra titulada *"Apuntes sobre la reforma del sistema penitenciario de España"*, en 1871, pues también sostiene la importancia del puesto de los capellanes y dedica un espacio para dirigirse a los directores de los establecimientos penitenciarios asesorándoles sobre lo importante que es la elección de un buen capellán para el buen funcionamiento del establecimiento⁶³.

El Decreto republicano de 25 de junio de 1873⁶⁴ marca el inicio de un paréntesis en la proclamada relevancia que mantuvo el puesto de los capellanes, pues dicho decreto determinó la supresión de estas plazas, fruto de la proclamación del principio de libertad religiosa. Se optó por sustituirse a los capellanes por maestros en cada centro⁶⁵. No obstante, el cierre del paréntesis se señala sólo un año después desde su inicio con el Decreto de 10 de mayo de 1874, que establece el Reglamento para el régimen interior de la Penitenciaría Política, ya que el cargo de capellán recobra su importancia. En opinión de García Valdés ahora, aparte de recuperar las competencias derogadas que les

⁶¹ Cfr. BOIX, V., *Sistema penitenciario del Presidio correccional de Valencia*, Imprenta del Presidio, Valencia, 1850, p., 62.

⁶² Cfr. PAYÁ RICO, A., *Libertad religiosas en centros...* op., cit., p., 77.

⁶³ Cfr. ARANGUREN, T., *Apuntes sobre la reforma del sistema penitenciario de España*, Establecimiento tipográfico de Pedro Abienzo, Madrid, 1871, p., 50.

⁶⁴ Gaceta de Madrid, núm. 180, de 29 de junio.

⁶⁵ Cfr. GARCÍA VALDÉS, C., *La ideología correccional...*, op., cit., p., 108.

eran en las demás prisiones, se les añade las funciones del maestro⁶⁶. Aunque realmente se reestablece el Cuerpo de Capellanes de Prisiones con el claro objetivo de atender indistintamente a todos los internos⁶⁷ mediante la promulgación del Real Decreto de 23 de junio, de 1881⁶⁸, que crea el cuerpo especial de empleados de establecimientos penales, el cual se integra por maestros, médicos y capellanes, entre otros.

Así, las obligaciones de los capellanes se van adecuando a la demanda sociopolítica del Estado. Como adelantábamos, la misión de los capellanes no se limitará estrictamente a los asuntos espirituales, sino que actuarán como mediadores entre los internos y la dirección del establecimiento, convirtiéndose así en una de las figuras con mayor peso en la organización penitenciaria⁶⁹.

2.3. La asistencia religiosa durante el siglo XX

Como era de esperar, por la trayectoria observada, en el siglo XX, la figura del capellán “goza de un elevado rango en la función de corrección de las penas privativas de libertad”⁷⁰. De hecho, a principios del centenario se observa por primera vez la necesidad de aumentar la cuota presupuestaria del concepto culto y sepultura. Esta exigencia se pone de manifiesto por la Dirección General de Prisiones en 1904, en el “*Expediente General para preparar la Reforma Penitenciaria*”⁷¹. Se puede observar la relevancia que obtuvo el cuerpo de capellanes fijándonos en el art. 114 del Decreto de 5 de mayo de 1913; ya que dicho precepto prevé 18 obligaciones del capellán escrupulosamente detalladas, frente a los 7 deberes previstos para los mismos en el art. 165 de la ya mencionada Ordenanza General de los Presidios del Reino, de 1834.

Durante la Segunda República el Decreto-Ley de 4 de agosto de 1931⁷² tomó como fundamento la libertad de cultos y se volvió a suprimir el cuerpo de capellanes de prisiones⁷³.

⁶⁶ Ibídem., p., 108.

⁶⁷ Cfr. CANO RUIZ, I., “La supresión del cuerpo de Capellanes en prisiones durante la II República”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXV, 2009, p., 159; CORRAL SALVADOR, S., *Confesiones religiosas y Estado español. Régimen jurídico*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2007, p., 193.

⁶⁸ Gaceta de Madrid, núm. 175, de 24 de junio. Cfr. Art. 13.

⁶⁹ Vid. CANO RUIZ, I., “La supresión del cuerpo de Capellanes en prisiones... op., cit., p., 160.

⁷⁰ Cfr. GARCÍA VALDÉS, C., *La ideología correccional...*, op., cit., p., 109; SOLER Y LABERNIA J., *Nuestras cárceles, presidios y casas de corrección*, Imprenta de Gabriel L. del Horno, Madrid, 1906, p., 49 – 50.

⁷¹ Cfr. MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, *Expediente General para preparar la Reforma Penitenciaria*, Imprenta Hijos de J. A. García, Madrid, 1904, p., 246 – 247.

⁷² Gaceta de Madrid, núm. 217, de 5 de agosto.

Nos parece atractivo ilustrar como el citado decreto-ley incorpora e entrelaza el principio de igualdad y el de libertad religiosa al comenzar afirmando que el *“El respeto pleno a la vida de la conciencia quedó consagrado en el Decreto del Ministerio de Justicia de 22 de mayo último, al establecer la libertad de cultos; ese Decreto hace sentir la necesidad de llevar a la esfera penitenciaria el alcance integral de sus disposiciones, situando al recluso de las diversas creencias en régimen de igualdad, medio único de dar cumplida efectividad a aquella libertad espiritual. En su virtud, y para darle carácter voluntario a todo acto de culto, estos tendrán lugar a solicitud de quienes lo deseen, mas no como exigencias de carácter reglamentario”*.

Mediante el primer artículo se disuelve la figura del capellán, como órgano administrativo, integrado en la Sección facultativa del Cuerpo de Prisiones, sin perjuicio de las situaciones jurídicas creadas hasta el momento, conforme a su art. 2. En su tercer precepto prevé la asistencia religiosa para cualquier preventivo o penado que la solicite sin importar el culto al que pertenezca como siempre que exista la posibilidad de ofrecerse la misma.

De este modo, comienza un nuevo periodo en el que la asistencia religiosa penitenciaria *“se configura como un derecho cuyo titular es el recluso y es a él a quien los poderes públicos van a proteger de manera efectiva, en aras de la libertad de conciencia y de la igualdad real de las personas”*⁷⁴. Este es el momento en el que la realidad se transforma situando a los poderes públicos en posición de intermediarios entre el recluso como titular del derecho de asistencia religiosa y el ministro de culto que corresponda⁷⁵.

Debemos tener en cuenta que esta disolución también es temporal, ya que se vuelve a restablecer el Cuerpo de Capellanes de Prisiones por Decreto de 17 de diciembre de 1943⁷⁶. Se podría decir que con este Decreto, la asistencia religiosa vuelve a la normalidad, ya que hasta entonces la Iglesia ya no se encargaba del auxilio espiritual, puesto que se había encomendado a los obispos de las diócesis por Orden Ministerial de 3 de octubre de 1938⁷⁷.

⁷³ Cfr. GARCÍA VALDÉS, C., *Régimen penitenciario de España (Investigación histórica y sistemática)*, Publicaciones del Instituto de Criminología Universal de Madrid, Madrid, 1975, p., 47.

⁷⁴ Vid. CANO RUIZ, I., “La supresión del cuero de Capellanes en prisiones... op., cit., p., 168.

⁷⁵ Vid. CANO RUIZ, I., “La supresión del cuero de Capellanes en prisiones... op., cit., p., 173.

⁷⁶ BOE núm. 1, de 1 de enero de 1944.

⁷⁷ BOE núm. 98, de 6 de octubre.

La implicación que supone la aplicación de la Ley de 15 de julio de 1954, sobre la situación de los funcionarios de la Administración Civil del Estado exige que se apruebe por Decreto de 2 de febrero de 1956⁷⁸ el Reglamento de los Servicios de prisiones, adaptado a las nuevas exigencias. El Reglamento dedica la Sección Tercera, bajo la rúbrica *“Asistencia espiritual y elementos aditivos de enseñanza y educación”* del Capítulo X del Título Primero, a la nueva realidad jurídica que adoptan los capellanes como funcionarios de la Administración Pública. Es interesante mencionar también el art. 77 de la Sección Primera intitulada *“Horario, formaciones y actos obligatorios”*, del Capítulo VIII, del Título Primero del Reglamento, puesto que en este apartado se puede observar cómo se ofrece una alternativa a los reclusos que no profesan la fe católica permitiéndoles permanecer en *“una dependencia que se designe para escuchar una lectura moral todo el tiempo que dure el Santo Sacrificio”*, para que de este modo los internos no se vean obligados a asistir a actos contrarios a sus convenciones religiosas o morales.

El Decreto 162/1968, de 25 de enero⁷⁹, surge como respuesta a la necesidad de enriquecer el mencionado Reglamento y modifica determinados artículos del mismo. Son cuatro los artículos modificados que abordan la materia que estudiamos. A nuestro entender, el más relevante es el art. 120; que señala que se impartirán *“tres clases de enseñanza: Ético-religiosa, cultural y de formación profesional. La enseñanza ético-religiosa comprenderá las materias y grados y se ajustará a los programas y clases que se determinen por la Dirección General de acuerdo con la delegación eclesiástica de dicho Centro. Los internos no estarán obligados a recibir enseñanza de una religión que no profesen”*.

En la misma línea progresiva a favor de la libertad religiosa de los internos, se flexibiliza la obligación decimosegunda de los capellanes comprendida en el art. 383 omitiendo la mención a libros que atenten contra la moral de la Iglesia o la fe; y suprimiendo el deber de los capellanes de distribuir en la escuela catecismos y devocionarios.

Finalmente recordamos la reforma que experimenta (en el último tercio del siglo XX) el Reglamento de 1956 por Real Decreto 2273/1977, de 29 de julio⁸⁰, *“a la*

⁷⁸ BOE núm. 75, de 15 de marzo.

⁷⁹ BOE núm. 31, de 5 de febrero de 1966.

⁸⁰ BOE núm. 210, de 2 de septiembre.

espera de que en un futuro próximo pueda elaborarse una Ley General Penitenciaria que, con una visión y ambición profundamente generalizadoras, contemple el problema en todas sus dimensiones”.

III. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LA ASISTENCIA RELIGIOSA PENITENCIARIA

1. Marco jurídico de la asistencia religiosa en el ámbito penitenciario

1.1. Normativa internacional

El art. 10.2 de nuestra Constitución establece que se han de tener en cuenta los instrumentos internacionales sobre derechos humanos al sostener que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la propia Constitución reconoce se han de interpretar de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre, de 1948 (en adelante DUDH) y a los tratados y acuerdos internacionales sobre esta materia que hayan sido ratificados por España⁸¹. Por lo tanto, es natural que la exposición de motivos del Proyecto de Ley General Penitenciaria, manifieste que el sistema penitenciario español diseñado en la LOGP recogió los principios asentados en los pactos internacionales sobre derechos humanos “y, en particular, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos elaboradas por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa”⁸².

Los principales tratados y declaraciones internacionales sobre derechos humanos que reconocen el derecho fundamental a la libertad de religión, o si se prefiere, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, son:

- La Declaración Universal de Derechos Humanos, de 18 de diciembre de 1948 (art.18).
- El Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de noviembre de 1950 (en adelante CEDH) (art. 9).
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966 (en adelante PIDCP) (art. 18).

⁸¹ Vid. SÁIZ ARNÁIZ, A., *La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El art. 10.2 de la Constitución Española*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999; GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., “Las normas internacional sobre Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales y Libertades reconocidas en la Constitución Española (art. 10.2 CE)”, en CRUZ VILLALÓN, P., GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., y RODRIGUEZ PIÑERO M. Y BRAVO FERRER, *Tres lecciones sobre la Constitución*, Mergablum, Sevilla, 1999, p., 31 – 54.

⁸² Vid. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios...*, op., cit., p., 49.

- La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981 (Resolución 36/55).

Estos instrumentos internacionales se deben tener en cuenta (por mandato expreso constitucional) a la hora de interpretar la normativa española sobre derecho de libertad religiosa en establecimientos penitenciarios.

1.1.1. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

Del 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955 se celebró el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente; éste, adoptó 94 reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Estas reglas fueron aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por medio de sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977.

En las *Observaciones preliminares* de estas reglas se explica el contenido y finalidad de las mismas. Se afirman qué no se tiene por objeto describir de forma pormenorizada un modelo de sistema penitenciario, sino que se pretende establecer los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria inspirándose en conceptos ampliamente aceptados en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas penitenciarios contemporáneos más adecuados.

Se podría decir que estas reglas contienen un principio fundamental que comporta dos directrices que tienen por objeto el respeto a las creencias religiosas de los internos. Así, bajo la rúbrica *Principio fundamental*, se afirma que las reglas 1) “*deben ser aplicadas imparcialmente. No se deben hacer diferencias de trato fundadas en perjuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento y otra situación cualquiera*”. Y 2) “*por el contrario, importa respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso*”.

Con respecto a la libertad religiosa, las reglas 41 (en sus 3 apartados) y 42, establecer las siguientes directrices:

- R. 41 “1) Si el establecimiento contiene un número suficiente de reclusos que pertenezcan a una misma religión, se nombrará a admitir a un representante autorizado de ese culto. Cuando el número de reclusos lo justifique, y las circunstancias lo permitan, dicho representante deberá prestar servicio con carácter continuo.
2) El representante autorizado nombrado o admitido conforme al párrafo 1 deberá ser autorizado para organizar periódicamente servicios religiosos y efectuar, cada vez que corresponda, visitas pastorales particulares a los reclusos de su religión.
3) nunca se negará a un recluso el derecho a comunicarse con el representante autorizado de una religión. Y, a la inversa, cuando un recluso se oponga a ser visitado por el representante de una religión, se deberá respetar en absoluto su actitud”⁸³.
- R. 42 “Dentro de lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, permitiéndole participar en los servicios organizados en el establecimiento y tener en su poder libros piadosos y de instrucción religiosa de su confesión”.

Además de estas reglas mínimas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adopto diversas resoluciones sobre los principios que deben aconsejar y organizar la vida penitenciaria. Entre las más importantes podemos enumerar la resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988⁸⁴ y la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, por la que se elaboró un elenco que comprendía 11 principios básicos para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

Los tres primeros principios reconocidos en esta última resolución, rezan así: “1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherente seres humanos. 2. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento y otros factores. 3. Sin perjuicio de lo que antecede, es necesario respetar las creencias religiosas y los preceptos culturales del grupo a que pertenezcan los reclusos, siempre que así lo exijan las condiciones en el lugar”.

⁸³ Vid. RIVERA BEIRAS I., “Los derechos fundamentales en la privación de libertad. (Análisis socio-jurídico de la normativa internacional)”, en RIVERA BEIRAS I. (coord.), *Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los Derechos Fundamentales de los reclusos*, J. M. Bosch, Barcelona, 1992, p., 71.

⁸⁴ Ídem., p., 76 – 81.

1.1.2. Las reglas penitenciarias europeas

El disfrute del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en los establecimientos penitenciarios públicos también fue objeto de atención por parte de la Unión Europea. De hecho, las primeras reglas penitenciarias del Consejo de Europa fueron aprobadas por la Resolución 5 (73), de 19 de enero de 1973, del Comité de ministros. Estas consistían básicamente, en una transcripción de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos⁸⁵ (57). En 1987 estas reglas fueron actualizadas por la Recomendación núm. R (87) 3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las reglas penitenciarias europeas, adoptada el 12 de febrero de 1987⁸⁶. El 11 de enero de 2006, tras 2 años de trabajo, el Comité de Ministros de los Estados miembros, adoptó la Recomendación núm. R (2006) 2, sobre las Reglas Penitenciarias Europeas.

Esta última Recomendación se divide en dos secciones. La *Parte I*, que comprende las reglas 1 a 13, recoge los principios fundamentales y el ámbito de aplicación de la misma. Y la *Parte II*, es relativa a las Condiciones de internamiento. Nos parece relevante destacar ciertas reglas determinantes en el ámbito que nos ocupa.

Así, por ejemplo, la regla 1 afirma que las personas privadas de libertad han de ser tratadas, igualmente, con el debido respeto a sus derechos fundamentales, pues conservan todos los derechos, excepto aquellos que naturalmente tengan que verse restringidos como consecuencia del fallo condenatorio, el sentido de la pena o el sentido de la ley⁸⁷.

En la misma idea, la regla 3, sostiene que las restricciones que se deban imponer a las personas privadas de su libertad deben ser limitadas conforme al criterio estricto de necesidad y siempre han de guardar una relación de proporcionalidad con los objetivos que justifiquen las restricciones que deban aplicarse al ejercicio de determinados derechos fundamentales de los penados.

De igual manera, la regla 13, hace especial mención al principio de no discriminación afirmando que *“las presentes reglas deben ser aplicadas con imparcialidad, sin discriminación alguna fundada en el sexo, la raza, el color, la*

⁸⁵ Cfr. GARCÍA BASALO C., “Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos del Consejo de Europa”, en *Revista de Estudios Penitenciarios*, 216-219, 1977, 519 – 591.

⁸⁶ Vid. *Revista de Estudios Penitenciarios*, 238, 1977, 195 – 208; RODRÍGUEZ ALONSO A., *Lecciones de Derecho Penitenciario*, 3ª edición, Comares, Granada, 2004, p., 377 – 393.

⁸⁷ Cfr. TÉLLEZ AGUILERA A., *Las nuevas reglas penitenciarias del Consejo de Europa (Una lectura desde la experiencia española)*, Edisofer, Madrid, 2006, p., 42 – 44.

lengua, la religión, las opiniones políticas y otros tipos de opiniones, la procedencia nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, las condiciones económicas, el nacimiento o cualquier otra situación”.

Refiriéndose a la alimentación, la regla 22.1) afirma que *“los internos deben disfrutar de un régimen alimenticio que tenga en cuenta su edad, estado de salud, estado físico, religión, cultura y tipo de trabajo concreto que desarrollen”* De este modo se suman nuevos criterios a tener en cuenta en cuanto a lo adecuado en lo que a la alimentación de los internos respecta, pues ya no hace una simple mención a la edad, salud y trabajo desarrollado; si no qué, tal y como Téllez Aguilera, A., ahora esos criterios se ven *“incrementados al incluirse expresamente referencias al Estado físico, religión y cultura en plano de igualdad con aquellos, y por tanto, desapareciendo la limitación que la referencia a” en la medida de lo posible” contenía las teclas derogadas”*⁸⁸.

Para nuestro estudio, también es interesante la regla 38, referente a las minorías étnicas y lingüísticas. Se prevé una consideración especial a las necesidades de los internos pertenecientes a dichas minorías, y se añade que, en la medida de lo posible, estos grupos deben poder continuar y observar sus prácticas culturales en el establecimiento penitenciario.

Siendo los derechos fundamentales *“(aquellos derechos) que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados...”*, el art. 25.2 CE los sitúa entre los elementos básicos o esenciales del sistema penitenciario español al afirmar que *“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán constituir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social así como al acceso de la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”*.

⁸⁸ TÉLLEZ AGUILERA A., *Las nuevas reglas penitenciarias...*, op., cit., p., 76.

Este precepto tiene como idea principal, al recluso como sujeto de derecho; y como tal, el penado es titular de todos los derechos reconocidos a los ciudadanos en el ordenamiento jurídico, exceptuando los que se vean necesaria y expresamente afectados por el fallo de la condena, el sentido de la pena impuesta y las directrices marcadas por la ley penitenciaria. Esta titularidad, implica la necesaria actuación por parte de los poderes públicos en aras de garantizar el goce y disfrute de aquellos derechos fundamentales que, como decíamos, no se encuentren limitados.

Como bien es sabido, la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales que se incluye en el Capítulo Segundo del Título I de la CE. Así, el art. 16.1 CE evoca este derecho en los siguientes términos: “*Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, que en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley*”.

En las clasificaciones de los derechos fundamentales, por norma general, la libertad religiosa se incluye en el conjunto de derechos de libertad (o autonomía) que protegen un ámbito de autonomía del individuo frente a los poderes públicos. Con lo cual, en las cuestiones espirituales cada persona tiene plena libertad y capacidad para actuar según su propia conciencia sin intromisiones de los poderes públicos o de terceros⁸⁹.

La naturaleza social del Estado además de implicar la custodia de la esfera de autodeterminación del individuo frente a los poderes públicos o frente a terceros, también supone una dimensión de *agere licere* que habilita al titular a manifestar sus creencias, a sostenerlas frente a terceros ir a actuar, tanto en público como en privado, conforme a ellas.

Conforme al planteamiento antes expuesto, el derecho de libertad religiosa implica una doble dimensión: una dimensión interna, que es la esfera de autonomía del individuo y se traduce en su derecho a profesar unas determinadas creencias o a no profesar ninguna; y otra, externa que autoriza a la persona a manifestar individual o colectivamente sus creencias, ya sea en público o, en privado; y de comportarse de acuerdo con ellas.

⁸⁹ Cfr. RODRÍGUEZ BLANCO M., “Manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa”, en ÁLVAREZ CORTINA C. y RODRÍGUEZ BLANCO M. (coords.), *La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio (Comentarios a su articulado)*, Comares, Granada, 2006, p., 50 – 54 y 92 – 95.

Este planteamiento se inspira en textos internacionales como la DUDH (art. 18)⁹⁰ y el CEDH (art. 9.1); pero al mismo tiempo se encuentra también consolidado tanto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), como en la del Tribunal Constitucional español (en adelante TC).

A modo de ejemplo podríamos mencionar el fundamento jurídico 3, de la STC 101/2004, de 2 de junio, pues sintetiza muy bien esta exposición:

“en cuanto derecho subjetivo, la libertad religiosa tiene una doble dimensión, interna y externa. Así, según dijimos en la STC 177/1996, de 11 de noviembre, F. 9, la libertad religiosa « garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual», y asimismo, « junto a esta dimensión interna, esta libertad... incluye también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, F. 2; 120/1990, de 27 de junio, F. 10, y 137/1990, de 19 de julio, F. 8)». Este reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere lo es «completa inmunidad de coacción del Estado o de cualesquiera grupos sociales» (STS 46/2001, de 15 de febrero, F. 4, y, en el mismo sentido, las SSTC 24/1982, de 13 de mayo, y 166/ 1996, de 28 de octubre) y se complementa, en su dimensión negativa, por la prescripción del art. 16.2 CE de que « nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias». La dimensión externa de la libertad religiosa se traduce, además, « en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso» (STC46/2001, de 15 de febrero), tales como las que se relacionan en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de libertad religiosa (LOLR), relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de este tipo de actividades”⁹¹.

Incluso podríamos afirmar que independientemente de que la libertad religiosa se incluye o no en el catálogo de los derechos de libertad, el derecho fundamental en sí

⁹⁰ Si bien es cierto que la declaración no tiene fuerza vinculante de por sí sola, por mandato del art. 10.2 CE se ha de tener en cuenta para interpretar las disposiciones relativas a los derechos fundamentales que la misma reconoce.

⁹¹ Tribunal Constitucional (Sala Primera), Recurso de amparo 2563-2002 de 2 de junio de 2004. Sentencia núm. 101/2004, de 2 de junio de 2004, FJ 3º.

protege unas facultades externas de actuación del individuo que han de ser tuteladas por los poderes públicos. Se recoge el mandato de tutela de las creencias religiosas presentes en la sociedad y de mantener las relaciones necesarias de cooperación con los grupos religiosos en el mandato general dirigido a los poderes públicos en el artículo 9.2 CE⁹², y esto implica hoy en día que los poderes públicos tienen el deber de adoptar medidas positivas dispuestas a garantizar el pleno, real y efectivo reconocimiento de la libertad religiosa⁹³.

Según Rodríguez Blanco, *“Ello no convierte a este derecho en un derecho de prestación, en el sentido técnico tradicional de esta expresión, pero sí justifica que legislador introduzca prestaciones a favor de los ciudadanos y entable relaciones de cooperación con los grupos religiosos con el objetivo último de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa”*⁹⁴.

Una de las STC que nutre el concepto de dimensión prestacional del derecho de libertad religiosa es la 46/2001, de 15 de febrero (F. 4). En dicho fundamento jurídico se afirma que:

“el contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a la injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al credo que profesen (SSTC 19/1985, de 13 de febrero, 120/1990, de 27 de junio, y 63/1994, de 28 de febrero, entre otras), pues cabe apreciar una dimensión externa de la libertad religiosa que se traduce en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, asumido en este caso por el sujeto colectivo o comunidades, tales como las que enuncia el art. 2 LOLR y respecto de las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una perspectiva que pudiéramos llamar asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el apartado 3 del mencionado art. 2 LOLR (...) y como especial expresión de tal actitud positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa, en sus plurales manifestaciones o conductas, el art. 16.3 de la constitución, tras formular una

⁹² “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” (art. 9.2 CE).

⁹³ Vid. GONZÁLEZ MORENO B., “El tratamiento dogmático del derecho de libertad religiosa y de culto en la Constitución española”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, 66 (2002), p., 123 – 145.

⁹⁴ Vid. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios...*, op., cit., p., 20.

declaración de neutralidad (SSTC 340/1993, de 16 de noviembre, y 177/1996, de 11 de noviembre), considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena los poderes públicos mantener « las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad y laicidad positiva que «veda a cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales» (STC 177/1996)”⁹⁵.

1.2. Legislación estatal unilateral

1.2.1. La Ley General Penitenciaria y breve reseña a los reglamentos penitenciarios de 1981 y 1996

Como decíamos anteriormente, el contenido del art. 25.2 CE⁹⁶ recoge los ejes fundamentales del sistema penitenciario español, con lo cual; la norma básica del sistema penitenciario español, es decir, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria⁹⁷ (en adelante LOGP), parte del contenido del mencionado artículo aunque el Proyecto de Ley General Penitenciaria se haya presentado ante las Cortes antes de que entrara en vigor la Constitución Española.

Esto es posible gracias a que el articulado de la nombrada ley mantuvo presente en su diseño el Anteproyecto de Constitución⁹⁸. De manera que hoy, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los internos constituyen los principios rectores que inspiran la actuación de los Poderes Públicos, y en particular, de la Administración Penitenciaria.

La LOGP comienza a referirse ya en sus primeros artículos al factor religioso. Así, el art. 3 recoge el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el art. 14 CE y dota a la Administración con una serie de responsabilidades para con los

⁹⁵ Tribunal Constitucional (Pleno), Recurso de amparo 3083-1996 de 15 de febrero de 2001. Sentencia núm. 65/2001, de 16 de marzo, de 2001, FJ 4º.

⁹⁶ Vid. Art. 25. 2 CE: “*Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad*”.

⁹⁷ BOE núm. 239, de 5 de octubre.

⁹⁸ Vid. CORTES GENERALES, *Ley Orgánica General Penitenciaria. Trabajos parlamentarios*, edición preparada por SAINZ MORENO, F., Servicio de Estudios y Publicaciones de las Cortes Generales, Madrid, 1980, p., 7 – 8.

reclusos encaminadas a satisfacer los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE; concretamente los comprendidos en los artículos 14 a 38⁹⁹.

El art. 3 LOGP configura al interno como un sujeto de derecho ligado a la administración por una relación jurídica. Este concepto inspira todo el comprendido de la LOGP de acuerdo a lo previsto en la exposición de motivos adjunta al Proyecto de Ley General Penitenciaria¹⁰⁰: *“La relación que une al penado con la Administración penitenciaria, representante de la sociedad, es una relación jurídica en que, a los derechos y deberes de una de las partes, se contraponen los correspondientes deberes y derechos de la otra. El penado conserva todos los derechos reconocidos a los ciudadanos por las normas jurídicas vigentes, con excepción, naturalmente, de aquellos cuya privación o limitación constituya precisamente el contenido de la pena impuesta”*.

Es cierto que el art. 3 LOGP al referirse al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales no se refiere expresamente al derecho fundamental de libertad religiosa, pero se ha de entender incluido entre las referencias anotadas, pues sí que se reconoce expresamente en el art. 54 LOGP, bajo la rúbrica *Asistencia religiosa*; y como resultado, todo penado que esté cumpliendo condena en un centro penitenciario puede ejercitar libremente su derecho de libertad religiosa, sin perjuicio de las restricciones inherentes al cumplimiento de la pena y a la relación jurídica penitenciaria.

El art. 54 LOGP resalta la dimensión prestacional del derecho de libertad religiosa al establecer que la *“La Administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que dicha libertad pueda ejercitarse”*. Como consecuencia de esta dimensión, podemos observar el art. 51.3 LOGP que establece que los internos puedan ser autorizados a comunicarse con sacerdotes y ministros de su religión cuya presencia se haya reclamado previamente. El precepto también señala que esas comunicaciones pueden ser intervenidas en la forma que reglamentariamente se establezca.

De igual manera el artículo 21.2 LOGP, referente a la alimentación de los presos, hace referencia a las convicciones filosóficas y religiosas como uno de los criterios que se han de tener en cuenta (en la medida de lo posible) en la alimentación.

⁹⁹ Obviamente exceptuando los que expresamente se vean limitados por el contenido del fallo de la sentencia; y el sentido de la pena impuesta y la ley penitenciaria.

¹⁰⁰ Finalmente no fue incluida en la LOGP, pero sí se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes (BOC) núm. 148, de 15 de septiembre de 1978.

También el artículo 25 LOGP al aludir a los horarios de actividad diaria y descansos nocturnos, vela por la necesaria atención a las necesidades espirituales y físicas de los internos.

Finalmente, debemos mencionar el art. 24 LOGP puesto que también se refiere a la asistencia religiosa al afirmar que *“se establecerán y estimularán, en la forma que se señale reglamentariamente, sistemas de participación de los internos en actividades o responsabilidades de orden educativo, recreativo, religioso, laboral, cultural o deportivo. [...]”*.

En cumplimiento de la previsión comprendida en la disposición adicional segunda de la LOGP se aprueba el primer Reglamento Penitenciario por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo. Por razones espacio-temporales no nos detendremos sobre el articulado del derogado Reglamento Penitenciario, pero sí que haremos referencias a determinados artículos relevantes del mismo al tratar el vigente Reglamento Penitenciario.

En el año 1996, mediante Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, se autoriza un nuevo Reglamento Penitenciario quedando de rogado el Reglamento del 81. No obstante se ha de tener en cuenta el tercer apartado de la misma disposición pues declara que *“No obstante lo dispuesto en el párrafo b) del apartado anterior, se mantiene la vigencia de los artículos 108, 109, 110 y 111 del primer párrafo del artículo 124 del Reglamento Penitenciario aprobado por el real decreto 1201/1981 de 8 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984, de 26 de marzo, relativos a faltas o infracciones de los internos, a las sanciones disciplinarias y a los actos de indisciplina grave cuya sanción puede ser inmediatamente ejecutada”*.

Al igual que ocurría en el anterior reglamento, el art. 25. 2 CE y 3 LOGP¹⁰¹, también constituyen las bases primordiales del diseño del régimen penitenciario.

¹⁰¹ Cfr. Artículo tercero LOGP: *“La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los reclusos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza. En consecuencia: Uno. Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena. Dos. Se adoptarán las medidas necesarias para que los internos y sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones de la Seguridad Social, adquiridos antes del ingreso en prisión. Tres. En ningún caso se impedirá que los internos continúen los procedimientos que tuvieran pendientes en el momento de su ingreso en prisión y puedan entablar nuevas acciones. Cuatro. La Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos. Cinco. El interno tiene derecho a ser designado por su propio nombre”*.

De suerte que el art. 3 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento penitenciario, afirma que la *“actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y derechos de los límites establecidos por la Constitución y la ley. En cuanto a los derechos de los internos, mantiene el principio de que éstos “sólo podrán ser restringidos cuando lo dispongan las leyes”*. Pero sobre todo, el principio más importante que recoge el mencionado artículo entre sus líneas es el que proclama que *“el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma”*.

Uno de los preceptos más importantes del Reglamento Penitenciario para nuestra materia, tanto en cuanto contempla el respeto al derecho de libertad religiosa y el régimen particular de la asistencia religiosa es, el art. 230, llamado *Libertad Religiosa*. Su contenido es el que sigue:

- “1. Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas. En los Centros podrá habilitarse un espacio para la práctica de los ritos religiosos.*
- 2. Ningún interno podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una confesión religiosa.*
- 3. La autoridad penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la alimentación, los gritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo permitan las disposiciones presupuestarias, la seguridad y vida del Centro y los derechos fundamentales de los restantes internos.*
- 4. En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas.”*

Como podemos observar, el último párrafo de este artículo al hablar sobre la asistencia religiosa se refiere expresamente a los acuerdos firmados por el Estado español con las confesiones religiosas. Con lo cual nos surge la duda de qué sucederá con aquellas confesiones minoritarias que no hayan suscrito ningún tipo de acuerdo de cooperación con el Estado español, pero este tema lo abordaremos más adelante.

Observamos que la nueva ordenación, a diferencia de lo que ocurría en el Reglamento de 1981, no se refiere a las dependencias y servicios de los

establecimientos penitenciarios de forma detallada, lo cual implica que no se contempla expresamente la existencia de un local destinado al culto religioso. De forma que el art. 11 del reglamento tan sólo menciona que los establecimientos penitenciarios deben tener el conjunto de dependencias y servicios que se estimen necesarios para que se desarrolle una convivencia ordenada, y que se contará con locales aptos para el desarrollo de las actividades encomendadas al personal penitenciario del establecimiento.

También observamos otra disimilitud con respecto al reglamento del 81 en cuanto a la ausencia de referencias al régimen jurídico del Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias. Esta falta de mención no es infundada, pues tiene su fundamento en el Acuerdo de 20 de mayo de 1993 entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española (en adelante CEE) sobre asistencia religiosa católica en los establecimientos penitenciarios¹⁰². Como señalábamos en el apartado 1.3.1. *Iglesia Católica*, este acuerdo se declina por un sistema de asistencia religiosa en el que no rige una relación funcionarial o contractual entre los sacerdotes y la Administración Penitenciaria, lo cual implica poner en práctica la declaración de extinguir el Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias comprendida en el apartado 7, del art. 50, de la Ley 62/ 2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

A pesar de ello, se podría decir que hubo un mantenimiento residual de este cuerpo, pues se preservaron las situaciones y derechos adquiridos por los sacerdotes que pertenecieran al mencionado Cuerpo de Capellanes de Instituciones Penitenciarias en el momento de la entrada en vigor del mencionado acuerdo (1 de enero de 1994), pues así lo preveía la disposición adicional primera del mismo.

1.2.2. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa

La LOLR desarrolla la libertad ideológica y religiosa comprendida en el art. 16 CE y la libertad e igualdad del 9.2 CE¹⁰³. Esta ley, posterior a la LOGP, no incorpora

¹⁰² El acuerdo se publicó por Orden de 24 de noviembre de 1993 (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1993).

¹⁰³ El art. 1.1 LOLR señala que “*El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto reconocido en la Constitución de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica*”.

novedades importantes con respecto a la garantía de la libertad religiosa en los centros penitenciarios¹⁰⁴.

El art. 2 recoge tanto la vertiente positiva, es decir el derecho de toda persona a practicar los actos de culto y a recibir asistencia religiosa de su propia confesión, como la negativa, mediante la prohibición de obligar a cualquier persona a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus propias convicciones (2.1.b).

Puesto que la LOLR no exige que la confesión religiosa cuyas creencias se invocan tenga firmados acuerdos de cooperación con el Estado español, ni que esté inscrita en el Registro de Entidades Religiosas regulado en el art. 5 de la misma, en principio, son titulares de este derecho todas las personas internadas en un centro penitenciario, sin importar cuáles sean sus creencias.

1.3. Acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas

En concordancia con lo estudiado anteriormente, tanto el derecho de libertad religiosa de los internos en establecimientos penitenciarios (con su implicación directa de garantizar a todos ellos la asistencia religiosa de su propia confesión), como la necesaria actuación por parte de los poderes públicos de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad de este derecho y facilitar los medios necesarios para su ejercicio, se reconocen tanto en la LOGP como en la LOLR.

Aquí es donde cobra protagonismo el principio de cooperación, ya abordado anteriormente, pues para que se pueda llevar a cabo la obligación antes mencionada, los poderes públicos deben mantener las oportunas relaciones de cooperación con las confesiones religiosas, ya que estas son las que deben practicar y desarrollar las actividades propias de la asistencia religiosa.

Tal como hemos visto en el apartado *1.2 Principios informadores*, la Administración no puede asumir funciones religiosas, puesto que entre sus competencias no se enumera la realización directa y autónoma de prestaciones de naturaleza religiosa. Esto implica que se deba poner especial interés en que no sobrevenga una confusión entre los fines públicos y los religiosos en cumplimiento del principio de laicidad¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Cfr. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios...*, op., cit., p., 34 – 35.

¹⁰⁵ Vid. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 340/1993, de 16 de noviembre: “*ha de tenerse en cuenta que los términos empleados por el inciso inicial del art. 16.3 CE no sólo expresan el carácter*

No obstante, nos parece interesante recordar que no sólo la realización de las prestaciones asistenciales espirituales corresponde a las confesiones religiosas, sino que también la determinación del contenido de tales prestaciones se establece por las mismas.

En coherencia con lo anterior, el régimen jurídico de la asistencia religiosa en establecimientos penitenciarios se contempla por los acuerdos de cooperación que se han suscrito entre los poderes públicos y las confesiones religiosas hasta la fecha. De suerte que, el mismo Reglamento Penitenciario, en su art. 230. 4, afirma que *“En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en los acuerdos firmados por el Estado con las diferentes confesiones religiosas”*.

1.3.1. Acuerdos de cooperación con la Iglesia católica de aplicación estatal

Entre los acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica podemos enumerar:

- a) el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos;
- b) el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española sobre asistencia religiosa católica en establecimientos penitenciarios.

En las líneas que siguen nos dedicaremos a resaltar los preceptos más relevantes de cada uno de los acuerdos suscritos entre la Administración Pública y la Iglesia Católica.

a) En cuanto al Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos entre el Estado español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, que entró en vigor al día siguiente desde su adopción, recoge en su art. IV el derecho de todo individuo a recibir asistencia religiosa. Lo hace mediante el siguiente enunciado: *“1. El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos. 2. El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los sacerdotes y de los religiosos en los centros mencionados que sean de carácter público serán regulados de común acuerdo entre las competentes*

no confesional del Estado en atención al pluralismo de creencias existentes en la sociedad española y la garantía de la libertad religiosa de todos, reconocidas en los arts. 1 y 2 de este precepto constitucional. Al determinar que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», cabe estimar que el constituyente ha querido expresar, además, que las confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica; pues como se ha dicho en la STC 24/1982, fundamento jurídico 1.º, el art. 16.3 CE «veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales»” (STC 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4º).

autoridades de la Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos". En palabras de Pardo Prieto, es acentuado "*el carácter netamente personalista de su redacción*"¹⁰⁶.

El citado precepto percibe la asistencia religiosa como un derecho perteneciente a los ciudadanos de obligado reconocimiento y que implica la necesaria posición de garante de los poderes públicos; tanto en centros públicos como en privados. La mención a los centros privados, en principio, es una cuestión que no afecta a los centros penitenciarios, pues las políticas públicas de privatización carcelaria se han intentado implementar sólo en el sistema estadounidense y chileno; obviamente sin obtener una aceptación generalizada por la importancia de los valores institucionales comprometidos, pero sobre todo por la nula obtención de beneficios en los presupuestos fiscales en materia penal¹⁰⁷.

Es visible que se enuncia que la asistencia religiosa católica en los establecimientos penitenciarios se ha de regular de común acuerdo entre las autoridades de la Iglesia y las autoridades estatales. Pero mediante esta afirmación, se realiza una reserva competencial en esta materia a favor de la Iglesia Católica, lo cual implica que el Estado no puede legislar unilateralmente sobre este componente sin previo acuerdo con la Iglesia.

Es importante precisar que los acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 (el de Asuntos Jurídicos; el de Enseñanza y Asuntos Culturales; el de Asuntos Económicos; y el de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y Servicio Militar de Clérigos y Religiosos)¹⁰⁸, tienen naturaleza de tratados internacionales, y eso influye decisivamente en la posición que obtienen en el sistema de fuentes nacional una vez que son ratificados y publicados en el BOE. Sobre este tema, Rodríguez Blanco opina que el contenido de los acuerdos "*prevalece, en virtud de los principios de especialidad y competencia, sobre el dispuesto en la LOGP, en el*

¹⁰⁶ Cfr. PARDO PRIETO, P., C., *Laicidad y Acuerdos del Estado...* op., cit., p., 159.

¹⁰⁷ Cfr. ARRIAGADA GAJEWSKI, I., "Cárceles privadas: La superación del debate costo-beneficio", *Política Criminal*, vol. 8, nr. 15, 2013, p., 210 – 248.

¹⁰⁸ Cfr. Tribunal Constitucional (Sala 2ª). Sentencia núm. 66/1982, de 12 de noviembre, FJ 5º: "*No podemos menos de constatar que este Acuerdo del Estado español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional y, por tanto (...), se inserta en la clasificación del art. 94 de la constitución Española, sin que, respecto a él se haya, institucionalmente, denunciado estipulaciones contrarias a la Constitución ni procedido conforme al art. 95 de la misma y, una vez publicado oficialmente el tratado, forma parte del ordenamiento interno*".

*Reglamento Penitenciario y en las demás disposiciones unilaterales dictadas por el Estado o las Comunidades Autónomas. [...]. No obstante, también ha de quedar claro que estos convenios deben, para su validez, respetar y asumir los principios rectores de la legislación penitenciaria”*¹⁰⁹.

b) Sobre el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la Conferencia Episcopal Española sobre asistencia religiosa católica en establecimientos penitenciarios, empezaremos por señalar que fue alcanzado el 20 de mayo de 1993, entre el ministro de Justicia y el presidente de la Conferencia Episcopal Española debidamente autorizado por la Santa Sede¹¹⁰. Fue publicado por Orden de 24 de noviembre de 1993¹¹¹, y entró en vigor el 1 de enero de 1994.

En su parte expositiva se explica que este acuerdo viene a desarrollar el art. IV del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. Y en cuanto a su composición, consta de 9 artículos, dos disposiciones adicionales y dos anexos.

Por lo que respecta a su naturaleza jurídica, este acuerdo tiene carácter normativo¹¹², creador de derecho objetivo, de índole programática, que establece una regulación de la asistencia religiosa que no se comprendía en la norma que le sirve de fundamento (art. IV del mencionado Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos). Si bien es cierto que el acuerdo no tiene naturaleza internacional, sino que se califica como una norma reglamentaria confeccionada consensuadamente por el Estado y la Iglesia; se debe tener en cuenta dos notas características de este acuerdo.

Y son: 1ª, la imposibilidad de modificación unilateral en virtud de los principios de competencia y especialidad, y 2ª, la prevalencia del acuerdo, en materia de asistencia religiosa, sobre las disposiciones comprendidas en la legislación unilateral penitenciaria y sobre el convenio catalán de 1987¹¹³.

Según Moreno Antón, *“puede entonces afirmarse que el acuerdo de 20 de mayo de 1993 es el verdadero acuerdo marco sobre asistencia católica en establecimientos*

¹⁰⁹ Vid. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios...* op., cit., p., 39.

¹¹⁰ Don Tomás de la Quadra-Salcedo y Fernández del Castillo, era el ministro de Justicia; y el Presidente de la CEE, era Don Elías Yáñez Álvarez; vid. MORENO ANTÓN, M., “La asistencia religiosa católica en centros penitenciarios...”, op., cit., p., 199 – 216.

¹¹¹ BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1993.

¹¹² Cfr. Ibídem, p., 206 – 207.

¹¹³ Vid. RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Los convenios entre las Administraciones Públicas y las Confesiones religiosas*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2003, p., 116 – 117.

*penitenciarios y que el convenio catalán seguirá en vigor como convenio de ejecución de la legislación estatal siempre que no se oponga a las previsiones del Acuerdo de 1993”*¹¹⁴.

1.3.2. Acuerdos de cooperación con las confesiones minoritarias y el Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, sobre asistencia religiosa penitenciaria

Por mandato del art. 7.1 LOLR que sostiene que “1. *El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos acuerdos se aprobarán por ley de las Cortes Generales*”, el Estado ha firmado, hasta la fecha, tres acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas minoritarias.

Sobre la relevancia del citado artículo, Basterra comenta que “*esta es, sin duda alguna, la aportación más destacada y la novedad más importante de la LOLR. Amplía, siguiendo el mandato constitucional (16.3 CE), el régimen convencional del Estado con la Iglesia Católica a las demás confesiones religiosas. Es, como decíamos, la aportación más destacada, casi revolucionaria, en España, pero también será, estamos seguros, fuente de problemas y de pretensiones de agravios comparativos por parte de muchas confesiones que no tendrán acceso a ellos*”¹¹⁵.

Los acuerdos de cooperación suscritos se aprobaron por las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, y estos son, respectivamente:

- FEREDE, Acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas evangélicas de España¹¹⁶.
- FCJE, Acuerdo de cooperación del Estado con la actual Federación de Comunidades Judías de España (inicialmente la federación se denominaba Federación de Comunidades israelitas de España, lo que en siglas era FCIE).

¹¹⁴ “Puede entonces afirmarse que el Acuerdo de 20 de mayo de 1993 es el verdadero Acuerdo Marco sobre asistencia católica en establecimiento penitenciarios y que el convenio catalán seguirá en vigor como convenio de ejecución de la legislación estatal siempre que no se oponga a las previsiones del Acuerdo de 1993”. MORENO ANTÓN, M., “La asistencia religiosa católica en centros penitenciarios...”, op., cit., p., 207.

¹¹⁵ Cfr. BASTERRA MONTSERRAT, D., *El derecho a la libertad religiosa y su tutela jurídica*, Civitas, Madrid, 1989, p., 333.

¹¹⁶ Con el objetivo de desarrollar lo establecido en el Acuerdo de cooperación del 92, los representantes de la FEREDE y el la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (en representación del Ministerio de Interior), suscribieron el 28 de julio de 2015 el Convenio de colaboración para la asistencia religiosa evangélica en centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

- CIE, Acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.

Estas leyes de aprobación tienen un contenido muy escaso. Se componen de una breve exposición de motivos, un único artículo, dos disposiciones finales y un anexo.

De igual forma que ocurría con los acuerdos con la Iglesia católica, los pactos adoptados en las leyes de 1992 tampoco pueden ser modificados sin el consentimiento de la otra parte, ya que aquí también rige el principio “*pacta sunt servanda*”.

La evidente similitud entre los acuerdos en cuanto a su contenido y expresiones normativas, se podría decir que extremadamente similares, pero no iguales, tiene su fundamento, en que, “*de este modo se intenta realizar un tratamiento de cada materia más acorde con las peculiaridades de cada confesión*”¹¹⁷.

En cuanto a la naturaleza de estos tres acuerdos, Mantecón Sancho sostiene que la mayor parte de la doctrina califica estos Acuerdos como pactos “*de derecho público interno, subrayando, por un lado su carácter de acuerdo con un ente de Derecho público, pero proclamando por otro su naturaleza formal normativa de Derecho estatal interno*”¹¹⁸. Según este autor, se puede afirmar que la equivalencia de estos pactos con lo convenido con la Iglesia católica en numerosos aspectos; como por ejemplo, la libertad y práctica religiosa de los militares¹¹⁹, y la de los internos en centros hospitalarios públicos y penitenciarios¹²⁰

Es relevante tener en cuenta que las iglesias y comunidades de miembros de las federaciones que han suscrito estos acuerdos con el Estado tienen la capacidad de decidir cuándo dejar de formar parte de dichas federaciones; y al mismo tiempo cabe la posibilidad de que se agreguen nuevas iglesias o comunidades posteriormente a la Federación de que se trate (lo cual les confieren todos los derechos y obligaciones contemplados en el acuerdo correspondiente)¹²¹.

El derecho a la asistencia religiosa de los internados en los centros penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros similares pertenecientes al

¹¹⁷ Cfr. BONET NAVARRO, J., “La celebración de festividades religiosas en los Acuerdos de cooperación de 1992”, *Revista Española de Derecho Canónico*, núm. 52, 1995, p., 305.

¹¹⁸ Vid. MANTECÓN SANCHO, J., *Los Acuerdos del Estado con las Confesiones acatólicas...* op., cit., p., 14.

¹¹⁹ Art. 8.1 y 2 de los Acuerdos de cooperación.

¹²⁰ Art. 9.1 de los Acuerdos de cooperación.

¹²¹ Cfr. MANTECÓN SANCHO, J., *Los Acuerdos del Estado con las Confesiones acatólicas...* op., cit., p., 16; MOTILLA DE LA CALLE, A., “Ley orgánica de libertad religiosa y Acuerdos con las confesiones: experiencia y sugerencias de iure condendo”, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, núm. 19, 2009, p., 20.

sector público, se recoge en el art. 9 de los tres Acuerdos. Se indica que la asistencia religiosa se debe desarrollar respetando el principio de libertad religiosa y se practicará por los ministros de culto, imanes o las personas que designan las respectivas iglesias o comunidades; claro está, solicitando la preceptiva y previa autorización de los órganos administrativos competentes.

En cuanto al modelo de asistencia religiosa optado, según apuntábamos en el apartado 3. *Modelos de asistencia religiosa*, el art. 9.2 de los acuerdos del 92, establece el modelo de libre acceso sin limitación de horario alguna, más que el debido respeto a las normas de organización y régimen interno de los centros penitenciarios y a la legislación penitenciaria.

En lo relativo al régimen económico de la asistencia religiosa, los acuerdos con la FEREDE y la FCJE convienen en que los gastos que se originen a raíz de la prestación de dicha asistencia serán soportados por las respectivas comunidades o iglesias; cabiendo la posibilidad de utilizar los locales que existan en el centro destinados a tal fin.

El acuerdo con la CIE, en cambio, dispone que los gastos generados por la asistencia religiosa se sufragarán en la manera que acuerden los representantes de la CIE con la dirección de los establecimientos penitenciarios¹²². Como decíamos, éste es un apunte que no aparece en los pactos con la FEREDE y la FCJE. No obstante, al igual que ocurre con los evangélicos y los judíos, los practicantes de la fe islámica también tienen la facultad de utilizar los locales que, para ese fin, existan en dichos centros.

En cuanto al Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, sobre asistencia religiosa penitenciaria¹²³ (vigente desde el día siguiente al de su publicación en el BOE), se dictó en desarrollo del régimen jurídico de la asistencia religiosa en centros penitenciarios albergado en el art. 9 de los mencionados acuerdos de cooperación¹²⁴ con la FEREDE, la CFJE y la CIE.

¹²² El 4 de octubre de 2007 se firmó el Convenio de colaboración del Estado con la Comisión Islámica de España para la financiación de los gastos que ocasione el desarrollo de la asistencia religiosa en los establecimientos penitenciarios de competencia estatal.

¹²³ BOE núm. 138, de 10 de junio. Entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, conforme a la disposición final cuarta del RD.

¹²⁴ Vid. Art. 1.1 del RD 710/2006, de 9 de junio: “Este real decreto tiene por objeto desarrollar el artículo 9 de los respectivos Acuerdos de cooperación firmados por el Estado con la Federación de

“Este real decreto pretende desarrollar lo previsto en los respectivos Acuerdos de Cooperación, de manera que el procedimiento de acreditación y autorización de los ministros de culto que dispensen asistencia religiosa ofrezca las máximas garantías de seguridad jurídica y se garantice mejor el pleno ejercicio de la libertad religiosa de los fieles evangélicos, judíos o musulmanes internados en centros penitenciarios”. Así reza el 5º párrafo de la exposición de motivos del mencionado RD. En concordancia con todo lo anterior, el contenido del real decreto es aplicable tan sólo a las confesiones religiosas que pertenezcan a la nFEREDE, FCJE y CIE. Por lo tanto, éste, no se aplica a la asistencia religiosa que presten aquellas confesiones religiosas que no formen parte de estas federaciones que han suscrito los pactos estudiados.

A primera vista puede parecer que esta situación quiebra el principio de igualdad para con las confesiones religiosas minoritarias sin acuerdo de cooperación; no obstante es público y notorio que las sociedades de nuestro tiempo conviven con nuevas formas de delincuencia terrorista por motivos religiosos.

Lo cual implica que en un centro penitenciario, siendo obviamente un entorno cerrado, en el que han de convivir penados por delitos de terrorismo de base religiosa, se deba poner especial interés y atención en evitar cualquier probabilidad de que puedan militar ideas de fondo fanático religioso en estos entornos, por la inseguridad social que se produciría a raíz de esto¹²⁵.

Por otra parte, no podemos obviar el hecho de que nada impide a dichas confesiones religiosas adherirse a las federaciones existentes o, cumpliendo los requisitos necesarios, suscribir sus propios convenios con la Administración¹²⁶.

Para la elaboración del RD analizado, fue preciso realizar varios trámites previos. Para empezar, como resulta del Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generalitat de Catalunya en materia de

Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías y la Comisión Islámica de España.”

¹²⁵ Cfr. GALLIZO LLAMAS, M., “Los derechos fundamentales de los presos: especial referencia al derechos de libertad religiosa”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXV, 2009, p., 97 – 98.

¹²⁶ Cfr. Art. 7 de la LOLR: “Uno. El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes Generales. Dos. En los Acuerdos o Convenios, y respetando siempre el principio de igualdad, se podrá extender a dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las Entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico”.

Administración Penitenciaria¹²⁷, se consultó a la Generalitat de Catalunya sobre la adopción del mencionado cuerpo legal. También se requirió un informe a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa¹²⁸; en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional primera de los acuerdos del 92, de igual manera se consultó a la FEREDE, FCJE y al CIE; y, finalmente, se solicitó el preceptivo dictamen al Consejo de Estado que fue aprobado por el Consejo de Estado el 4 de mayo de 2006.

No pretendemos detenernos en detalle sobre los temas tratados en esta normativa, pero sí conviene realizar una breve enumeración de cada uno de ellos:

- contenido de la asistencia religiosa (art. 1),
- propuesta y autorización de asistentes religiosos (art. 2),
- requisitos para la autorización (art. 3),
- concesión de la autorización (art. 4),
- duración de la autorización (art. 5),
- cese, revocación y suspensión de la autorización (art. 6),
- régimen de la asistencia religiosa (art. 7),
- solicitud de asistencia religiosa (art. 8),
- locales (art. 9); y
- régimen económico (art. 10).

También comprende tres disposiciones:

- Disposición adicional única; dispone que, en ámbito de los establecimientos penitenciarios militares, será la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa la Administración Penitenciaria del mismo.
- Disposición final primera; indica que la competencia en cuanto a la potestad legislativa y reglamentaria de la asistencia religiosa penitenciaria corresponde al Estado, de conformidad con lo establecido en los preceptos 149.1.1ª y 6ª CE¹²⁹.
- Disposición final segunda; se refiere a las modificaciones presupuestarias oportunas para el efectivo cumplimiento de lo previsto en el presente RD,

¹²⁷ BOE núm. 43, de 20 de febrero de 1984.

¹²⁸ La Comisión Asesora de Libertad Religiosa depende del Ministerio de Justicia; y conforme al art. 8 LOLR lo corresponde las siguientes competencias: “*estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones relativas a la aplicación de esta Ley, y particularmente, y con carácter preceptivo, en la preparación y dictamen de los Acuerdos o Convenios de cooperación*”.

¹²⁹ Cfr. SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, À., *Prisiones y libertad religiosa. Análisis del régimen jurídico (estatal y autonómico) de la libertad religiosa penitenciaria*, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2007, p., 111 – 112.

señalando que será el Ministerio de Economía y Hacienda el encargado de realizarlas.

- Disposición final tercera; dota de competencia a los Ministros de Justicia, Defensa y del Interior para que, en el ámbito de sus jurisdicciones, dicten las normas necesarias en aplicación del RD.

Anteriormente hemos mencionado el RD 3482/1983, de 28 de diciembre. Sin ánimo de desviarnos del tema abordado, consideramos que conviene hacer un pequeño inciso en este punto, para aclarar que mediante el mencionado RD, Cataluña es la única Comunidad Autónoma que tiene competencia propia en cuanto a la ejecución y gestión de los centros penitenciarios situados en su territorio. Este cuerpo legislativo se dictó en desarrollo de lo establecido en el art. 168 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por LO 6/2006m de 19 de julio¹³⁰.

El mencionado precepto dota a la Generalidad de competencia en materia penitenciaria afirmando que *“1. Corresponde a la Generalidad la competencia ejecutiva de la legislación del Estado en materia penitenciaria, que incluye en todo caso: a) La capacidad para dictar disposiciones que adaten la normativa penitenciaria a la realidad social de Cataluña. b) La totalidad de la gestión de la actividad penitenciaria en Cataluña, especialmente la dirección, la organización, el régimen, el funcionamiento, la planificación y la inspección de las instituciones penitenciarias de cualquier tipo situadas en Cataluña. c) La planificación, la construcción y la reforma de los establecimientos penitenciarios situados en Cataluña. d) La administración y gestión patrimonial de los inmuebles y equipamientos adscritos a la Administración Penitenciaria catalana y de todos los medios materiales que le sean asignados. e) La planificación y organización del trabajo remunerado de la población reclusa, así como la ejecución de las medidas alternativas en prisión y las actividades de reinserción. 2. La Generalidad podrá emitir informes en el procedimiento de otorgamiento de indultos”*.

Como resulta de esta delegación de competencias, se suscribió el Acuerdo Marco entre la Generalitat de Cataluña y los obispos de las diócesis catalanas sobre asistencia religiosa católica en los centros penitenciarios de Cataluña, firmado el 10 de julio de 1987. Sobre este acuerdo sólo queremos precisar que a pesar de que se mencione expresamente el art. IV del Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos de 1979, ello

¹³⁰ BOE núm. 172, de 20 de julio.

no implica que éste sea aplicación directa de un tratado internacional; pues en materia de legislación penitenciaria, el Estado posee la competencia exclusiva. Pero, tal y como mencionamos anteriormente, Cataluña asumió la ejecución de la legislación penitenciaria estatal, fundó la legitimidad de dicho acuerdo marco en base a lo que se establecía en el art. 2.3 LOLR, art. 54 LOGP y art. 180 del Reglamento Penitenciario de 1981¹³¹.

CONCLUSIONES

Para concluir el presente trabajo, deseamos aportar algunas conclusiones en relación con los epígrafes anteriores sobre la materia objeto de estudio:

Primera. - La asistencia religiosa consiste en la posibilidad de recibir los servicios espirituales de la propia confesión, a petición propia del creyente, en situaciones de especial sujeción.

Segunda. - El Estado asegura el correcto ejercicio de la asistencia religiosa de conformidad con los principios de laicidad, de neutralidad del Estado y el de cooperación con las confesiones religiosas.

Tercera. - Podemos hablar de una cotitularidad del derecho a la asistencia religiosa. Esta la comparten las personas individuales y las confesiones religiosas (católica y confesiones minoritarias) teniendo en cuenta que éstas son las encargadas de prestar el servicio al ciudadano que lo precisa y que sobre el Estado sólo recae la obligación de facilitar esta prestación.

Cuarta. - El siglo XIX supuso por primera vez que la asistencia religiosa fuera considerada como una actividad específica en sí misma destinada a las personas ingresadas en los establecimientos penitenciarios. En su comienzo sólo se enfocaba a las personas detenidas por orden de la autoridad religiosa, sin que tenga una relación directa con la posibilidad de corrección del penado.

Quinta. - La Ordenanza General de los Presidios del Reino, de 1834, supuso un punto de inflexión en la asistencia religiosa, pues fue el primer texto legal que regulaba todo lo referente a la figura del capellán bajo la rúbrica *asistencia espiritual y sanitaria*.

¹³¹ Cfr. MORENO ANTÓN, M., “La asistencia religiosas católica en centros penitenciarios...”, op., cit., p. 205.

Sexta. - Los capellanes no se limitaban estrictamente a los asuntos espirituales, sino que actuaban como mediadores entre los internos y la dirección del establecimiento, convirtiéndose así en una de las figuras con mayor peso en la organización penitenciaria del siglo XIX y XX. No obstante, el acuerdo de 20 de mayo de 1993 entre el Ministerio de Justicia y la CEE sobre asistencia religiosa católica en los establecimientos penitenciarios, se declina por un sistema de asistencia religiosa en el que no rije una relación funcional o contractual entre los sacerdotes y la administración penitenciaria. Lo cual implica poner en práctica la declaración de extinguir el cuerpo de capellanes de Instituciones Penitenciarias comprendida en el apartado 7, del art. 50, de la Ley 62/2003, de 20 de diciembre.

Séptima. - La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión se reconocen los principales tratados y declaraciones internacionales sobre derechos humanos. De manera que hoy, el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los internos constituyen los principios rectores que inspiran la legislación estatal, los acuerdos de cooperación (tanto con la Iglesia católica, como con las confesiones minoritarias) y la actuación de los poderes públicos, en particular, de la Administración Penitenciaria.

BIBLIOGRAFÍA

ARANGUREN, T., *Apuntes sobre la reforma del sistema penitenciario de España*, Establecimiento tipográfico de Pedro Abienzo, Madrid, 1871.

ARRIAGADA GAJEWSKI, I., “Cárceles privadas: La superación del debate costo-beneficio”, *Política Criminal*, vol. 8, nr. 15, 2013.

ASENSIO SÁNCHEZ, M. A., CALVO ESPIGA, A., MELÉNDEZ-VALEDÉS NAVAS, M., *Derecho, conciencia y libertad religiosa: derecho y factor religioso*, Difusora Laurousse – Editorial Tecnos, Madrid, 2015.

BASTERRA MONTSERRAT, D., *El derecho a la libertad religiosa y su tutela jurídica*, Civitas, Madrid, 1989.

BERISTAIN IPIÑA, A., “Asistencia religiosa. Derechos religiosos de los sancionados a penas privativas de libertad”, en COBO DEL ROSAL, M. (Dir.) y BAJO FERNÁNDEZ, M., (Coord.), *Comentarios a la legislación penal*, Tomo VI, vol. 2º, Edersa, Madrid, 1986.

BOIX, V., *Sistema penitenciario del Presidio correccional de Valencia*, Imprenta del Presidio, Valencia, 1850.

BONET NAVARRO, J., “La celebración de festividades religiosas en los Acuerdos de cooperación de 1992”, *Revista Española de Derecho Canónico*, núm. 52, 1995.

CADALSO, F., “Discurso en homenaje al insigne jurisconsulto Tomás Cerdán de Tallada”, en *Antecedentes y Crónica del Primer Congreso Penitenciario Español, octubre de 1909*, Imprenta la Gutenberg, Valencia, 1920.

CANO RUIZ, I., “La supresión del cuero de Capellanes en prisiones durante la II República”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXV, 2009.

CERDÀ DE TALLADA, T., *Visita de la cárcel y de los presos*, Edició a cura de Teresa Canet Aparisi, Universitat de València, 2008.

CONTRERAS MAZARIO, J. M^a., *El régimen jurídico de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas en el sistema español*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989.

CONTRERAS MAZARIO, J. M^a., *La asistencia religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ordenamiento jurídico español*, vol. II, Universidad Complutense, Madrid, 1988.

CORRAL SALVADOR, S., *Confesiones religiosas y Estado español. Régimen jurídico*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2007.

CORTES GENERALES, *Ley Orgánica General Penitenciaria. Trabajos parlamentarios*, edición preparada por SAINZ MORENO, F., Servicio de Estudios y Publicaciones de las Cortes Generales, Madrid, 1980.

DE CHAVES, C., *Relación de la cárcel de Sevilla*, 1585 (se ha utilizado la edición de Cásicos Árbol, José Esteban Editor, Madrid, 1983).

ESPAÑA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS, *La libertad religiosas en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo: 1979 – 2004*, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Madrid, 2005.

FUENTES, G., “Laicidad del Estado y derecho a la asistencia religiosa”, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 3, 1987.

GALLIZO LLAMAS, M., “Los derechos fundamentales de los presos: especial referencia al derechos de libertad religiosa”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXV, 2009.

GARCÍA BASALO C., “Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos del Consejo de Europa”, en *Revista de Estudios Penitenciarios*, 238, 216-219, 1977.

GARCÍA VALDÉS, C., *La ideología correccional de la reforma penitenciaria española del siglo XIX*, Edisofer, Madrid, 2006.

GARCÍA VALDÉS, C., *Régimen penitenciario de España (Investigación histórica y sistemática)*, Publicaciones del Instituto de Criminología Universal de Madrid, Madrid, 1975.

GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., “Las normas internacional sobre Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales y Libertades reconocidas en la Constitución Española (art. 10.2 CE)”, en CRUZ VILLALÓN, P., GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., y RODRIGUEZ PIÑERO M. Y BRAVO FERRER, *Tres lecciones sobre la Constitución*, Mergablum, Sevilla, 1999.

GONZÁLEZ DEL VALLE J. M., *Derecho Eclesiástico Español*, 6ª ed., Thomson Civitas, Pamplona, 2005.

GONZÁLEZ MORENO B., “El tratamiento dogmático del derecho de libertad religiosa y de culto en la Constitución española”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, 66, 2002.

GOTI, J., *Sistema de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2ª ed. revisada, ed. del Autor, Zaráuz, 1994.

IBÁN. I. C., PRIETO, L., y MOTILLA, A., *Derecho eclesiástico*, Mc Graw-Hill, Madrid, 1997.

LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D.; *Derecho Eclesiástico del Estado: derecho a la libertad de conciencia*, Civitas, Madrid, 2011.

LLAMAZARES, D., “Los acuerdos y el principio de igualdad; comparación con los acuerdos con la Iglesia católica y situación jurídica de las confesiones sin acuerdo”, en *Acuerdos del Estado español con confesiones religiosas minoritarias en VV.AA.*, (coords. V. REYNA y M. A. FÉLIX), BALLESTA, Madrid 1996.

- LLAMAZARES, D., *Derecho de la libertad de conciencia II. Libertad de conciencia, identidad personal y solidaridad*, 2ª ed. Thomson-Civitas, Madrid 2003.
- LLORCA ORTEGA, J., *Cárceles, presidios y casas de corrección en la Valencia del XIX (Apuntes históricos sobre la vida penitenciaria valenciana)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992.
- LÓPEZ ALARCÓN, M., “Asistencia religiosa”, en FERRER ORTIZ, J. (coord.), *Derecho Eclesiástico del Estado Español*, Eunsa, Pamplona, 2007.
- LÓPEZ ALARCÓN, M., “Asistencia Religiosa”, en VV.AA., *Derecho eclesiástico español*, 6ª ed., Eunsa, Pamplona, 2010.
- MANTECÓN SANCHO, J., *Los Acuerdos del Estado con las Confesiones acatólicas*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, Jaén, 1995.
- MANTECÓN, J., “La asistencia religiosa penitenciaria en las normas unilaterales y acuerdos con las confesiones”, en *Ius Canonicum*, 37, 1997.
- MARTÍ SÁNCHEZ, J. Mª., “Presupuestos y regulación de la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. X, 1994.
- MARTÍNEZ VALLE, C., *La libertad religiosa en las sociedades multiculturales. Las jurisprudencias nacional y europea*, por Gerardo Ruiz-Rico y Juan José Ruiz Ruiz (dirs.), *Historia y Memoria de la Educación*, 4, 411-419, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2016.
- MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. DIRECCIÓN GENERAL DE PRISIONES, *Expediente General para preparar la Reforma Penitenciaria*, Imprenta Hijos de J. A. García, Madrid, 1904.
- MINISTERIO DE JUSTICIA, *Jornadas jurídicas sobre libertad religiosa en España*, Ministerio de Justicia de España, Madrid, 2008.
- MINISTERIO DE JUSTICIA, *La nueva realidad religiosa española: 25 años de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa*, Ministerio de Justicia de España, Madrid, 2006.
- MOLANO, E., “La asistencia religiosa en el Derechos eclesiástico del Estado español”, *Persona y Derecho*, núm. 11, 1984.

MORENO ANTÓN, M., “La asistencia religiosa católica en centros penitenciarios. Comentarios al Acuerdo de 20 de mayo de 1993 entre el Presidente de la CEE y el Ministro de Justicia”, *Revista Española de Derecho Canónico*, vol. 51, 1994.

MORENO, M., “La asistencia religiosa católica en centros penitenciarios. Comentario al Acuerdo de 20 de mayo de 1993 entre el Presidente de la CEE y el Ministerio de Justicia”, en *Revista Española de Derecho Canónico*, 51, 1994.

MOTILLA DE LA CALLE, A., “Ley orgánica de libertad religiosa y Acuerdos con las confesiones: experiencia y sugerencias de iure condendo”, *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, núm. 19, 2009.

MOTILLA, A., IBÁN, I. C., PRIETO SANCHÍS, L., *Manual de Derecho eclesiástico*, Trotta, Madrid, 2004.

OLMOS, M. E., “La asistencia religiosa, en VV. AA”., *Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1994.

PARDO PRIETO, P. C., *Laicidad y Acuerdos del Estado con Confesiones religiosas*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008

PAYÁ RICO, A., *Libertad religiosas en centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros*, Ediciones Laborum, 2017.

PORRAS RAMÍREZ, J. M^a., MOTILLA, A., *Derecho de libertad religiosa*, Tecnos, ed. 4^a; Madrid, 2016.

RIVERA BEIRAS I., *Los derechos fundamentales en la privación de libertad. (Análisis socio-jurídico de la normativa internacional)*, en RIVERA BEIRAS I. (Coord.), *Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la defensa de los Derechos Fundamentales de los reclusos*, J. M. Bosch, Barcelona, 1992.

RODRÍGUEZ ALONSO A., *Lecciones de Derecho Penitenciario*, 3^a edición, Comares, Granada, 2004.

RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Los convenios entre las Administraciones Públicas y las Confesiones religiosas*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2003.

RODRÍGUEZ BLANCO M., “Manifestaciones del derecho fundamental de libertad religiosa”, en ÁLVAREZ CORTINA C. y RODRIGUEZ BLANCO M. (coords.), *La libertad religiosa en España. XXV años de vigencia de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio (Comentarios a su articulado)*, Comares, Granada, 2006.

RODRÍGUEZ BLANCO, M., *La libertad religiosa en centros penitenciarios*, Ministerios del Interior. Secretaría General Técnica, Madrid, 2008.

ROJO ÁLVAREZ-MANZANEDA, L., “La asistencia religiosa”, en PORRAS RAMÍREZ, J. M., (coord.), *Derecho de libertad religiosa*, 4ª ed., Tecnos, Madrid, 2016.

SÁIZ ARNÁIZ, A., *La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El art. 10.2 de la Constitución Española*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.

SANZ DELGADO, E., “La asistencia religiosa en la ejecución penal hasta el siglo XX”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. XXV, 2009.

SATORRAS FIORETTI, R. Mª., *El derecho a la asistencia religiosa en los tanatorios*, J. M. Bosch, Barcelona, 2004.

SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, À., *Prisiones y libertad religiosa. Análisis del nuevo régimen jurídico (estatal y autonómico) de la libertad religiosa penitenciaria*, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007.

SEVILA Y SOLANAS, F., *Historia penitenciaria española (La Galera)*, El Adelantado de Segovia, Segovia, 19147.

SOLER Y LABERNIA J., *Nuestras cárceles, presidios y casas de corrección*, Imprenta de Gabriel L. del Horno, Madrid, 1906.

SOUTO, J. A., *Comunidad política y libertad de creencias. Introducción a las Libertades Públicas en el Derecho Comparado*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2003.

TÉLLEZ AGUILERA A., *Las nuevas reglas penitenciarias del Consejo de Europa (Una lectura desde la experiencia española)*, Edisofer, Madrid, 2006.

ÍNDICE LEGISLATIVO

Constitución española

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria

Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa

Leyes 24, 25 y 26 de 1992, de 19 de noviembre (BOE de 11 de noviembre), por las que se aprueban los Acuerdos de cooperación firmados con la Federación de Comunidades Israelitas (FCJE), y Comisión Islámica en España (CIE).

Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España.

Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.

Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la comisión Islámica de España, en el ámbito de la asistencia religiosa.

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el nuevo Reglamento Penitenciario (BOE núm. 40, 15 de febrero).

Real Decreto 1201/1981, del Reglamento penitenciario (BOE núm. 40, de 23-25 de junio).

Orden de 24 de noviembre de 1993 por la que se dispone la publicación del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en los Establecimientos penitenciarios.

Orden de 20 de diciembre de 1985 que publica el Acuerdo sobre la Asistencia religiosa católica en hospitales públicos, de 24 de julio de 1985.

ÍNDICE JURISPRUDENCIAL

Tribunal Constitucional (Sala Primera), Recurso de amparo 2563-2002 de 02 de junio de 2004. Sentencia núm. 101/2004, de 2 de junio de 2004.

Tribunal Constitucional (Pleno), Recurso de amparo 3083-1996 de 15 de febrero de 2001. Sentencia núm. 65/2001, de 16 de marzo, de 2001.

Tribunal Constitucional (Sala Primera). Sentencia núm. 41/2001, de 12 de febrero.

Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 340/1993, de 16 de noviembre.

Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 24/1982, de 13 de mayo.

Tribunal Constitucional (Sala 2ª). Sentencia núm. 66/1982, de 12 de noviembre.